

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Temuco  
CAUSA ROL : C-3385-2018  
CARATULADO : CALDERÓN/BBVA CHILE S.A

Temuco, diez de Marzo de dos mil veinte

VISTOS:

Que en folio 1, comparece don Francisco Pineda Peña, abogado, con domicilio en calle Claro Solar N° 780, oficina N° 404, Edificio Peñafiel, Temuco, en representación de doña CECILIA ANDREA SALAS URRUTIA, RUT 13.313.542-1, chilena, soltera, ingeniero forestal, y de doña CLAUDIA ELIZABETH BESNIER CALDERÓN, RUT 16.538.808-9, chilena, soltera, técnico en administración de empresas, ambas domiciliadas en calle Aldunate, N° 710, departamento N° 605 del edificio Golden Plaza, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra de don MAURICIO ALEJANDRO ULLOA DEL PRADO, cédula nacional de identidad número 8.784.164-2, chileno, receptor judicial, con domicilio en Av. Caupolicán 579, Temuco; y de SOCIEDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, sociedad anónima bancaria y financiera, representada por su Gerente General, don MANUEL OLIVARES ROSSETTI, ambos con domicilio en calle Av. Costanera Sur N° 2710, Torre A, piso 23, Parque Titanium, comuna de Las Condes, Santiago, en razón de los fundamentos de hecho y derecho que expone en su libelo.

Con fecha 03 de septiembre de 2018, se notificó personalmente al demandado Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Con fecha 06 de octubre de 2018, la demandante subsana la demanda en el sentido de tener como demandada dos de la presente acción a BANCO SCOTIABANK CHILE S.A, RUT 97.018.000-1, sociedad anónima bancaria y financiera, representada por su gerente actual, don FRANCISCO SARDÓN DE TABOADA, ambos con domicilio en calle Morandé N° 226, piso 8°, comuna y ciudad de Santiago.

Con fecha 23 de noviembre de 2018, se notificó la demanda al demandado Mauricio Ulloa Del Prado de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 23 de noviembre de 2018, el demandado Scotiabank Chile S.A. contestó la demanda. Con fecha 08 de febrero de 2019, el demandado Mauricio Ulloa Del Prado contestó la demanda.

Con fecha 18 de febrero de 2019, el demandante evacuó en trámite de la réplica.

Con fecha 25 de febrero de 2019, los demandados evacúan el trámite de la réplica.

Con fecha 27 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, con la asistencia de la parte demandante representada por su abogado don Tomás Sepúlveda Muñoz y en rebeldía de la parte demandada. Llamadas las partes a conciliación esta no se produce.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 31 de mayo de 2019, se recibió la causa a prueba, complementada por resolución de 16 de septiembre de 2019, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y riéndose la prueba que consta en autos.

Con fecha 12 de diciembre de 2019, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que, a folio 71 el demandado Mauricio Ulloa Del Prado tacha al testigo don FREDDY AGUSTIN SALAS CORREA., en virtud del artículo 358 N° 1 y 6 del CPC, por ser el testigo padre de una de las demandantes y por haber manifestado un interés directo en el pleito. Que, el demandado Banco Scotiabank Chile S.A. tacha igualmente al testigo en virtud del artículo 358 N° 1 por las mismas causales y fundamentos esgrimidos solicitando que se prescinda del testimonio atendido el carácter objetivo de la causal del N° 1 del artículo 358 del C.P.C. Que, el demandante evacuando el traslado sostiene que: “La parte demandante se viene en oponer a la tacha planteada por cuanto si bien es cierto existe vínculo de parentesco existe manifestación inequívoca de la presentación de la demanda de que el testigo que depone tiene participación y conocimiento directo de los hechos que para estos efectos se discuten, por lo tanto, se solicita se acceda a la deposición o que en subsidio sea una cuestión que su señoría resuelva al momento de pronunciarse sobre las demanda, con costas.”

SEGUNDO: Que el artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, señala que son inhábiles para declarar el cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigo. Que don Freddy Agustin Salas Correa señaló expresamente tener una relación de parentesco con la demandante Cecilia Salas Urrutia, declarando que es su hija, motivo más que suficiente para hacer lugar a la tacha según se dirá en lo resolutivo del fallo. Habiéndose acogido la tacha formulada en relación al artículo 358 número 1, resulta innecesario pronunciarse sobre la configuración de la tacha deducida por el demandante Mauricio Ulloa Del Prado del artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil.

EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que con fecha 11 de julio de 2018 don FRANCISCO PINEDA PEÑA, abogado, en representación de doña CECILIA ANDREA SALAS URRUTIA, y de doña CLAUDIA ELIZABETH BESNIER CALDERÓN, deduce demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra de don MAURICIO ALEJANDRO ULLOA DEL PRADO, y de SOCIEDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, en razón de los fundamentos de hecho y derecho que expone en su libelo, al siguiente tenor:

“Los hechos. a) Antecedentes previos: 1. En causa RIT C-5584-17, sobre juicio ejecutivo para cobro de pagaré en contra de don RICHARD WILLIAMS CONTRERAS GIHA, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, se procede a trabar embargo en el siguiente domicilio, indicado en la respectiva demanda: “CALLE ALDUNATE N° 710, DE LA CIUDAD DE TEMUCO”, SIN OTRA MENCIÓN. Pues bien, dicha dirección, en la forma indicada, corresponde al



Foja: 1

edificio “Golden Plaza” de esta ciudad, el cual, evidentemente cuenta con varios departamentos en su interior. Consta en la carpeta virtual de la citada causa, que tanto la notificación de la demanda, así como el requerimiento de pago, se hicieron siempre en el domicilio de mis representadas, esto es: calle Aldunate N°710, departamento N° 605, de la ciudad de Temuco, lo cual no se entiende, por cuanto, siendo un conjunto de departamentos, no existe razón lógica para intentar justamente en ese las notificaciones. El absurdo se agrava al existir al menos 5 estampes receptoriales en el domicilio de mis representadas; tres constan en el cuaderno principal y dos en el de apremio: a) El primero, de fecha 12 de diciembre del año 2017, para la notificación de la demanda ejecutiva a don RICHARD WILLIAMS CONTRERAS GIHA, en el domicilio Aldunate N°710, departamento N°605, efectuado por el receptor don MAURICIO ULLOA DEL PRADO, señalando que es su domicilio y que se encuentra en el lugar del juicio, según lo informado por persona adulta de sexo femenino, sin señalar quién; b) El segundo, de fecha 13 de diciembre del año 2017, para la notificación de la demanda ejecutiva, también a don RICHARD WILLIAMS CONTRERAS GIHA, nuevamente en el mismo domicilio, esto es, calle Aldunate N°710, departamento N°605, efectuado por el receptor don MAURICIO ULLOA DEL PRADO, señalando, nuevamente, que es su domicilio y que se encuentra en el lugar del juicio, según lo informado por persona adulta de sexo femenino, sin señalar quién; c) En tercer lugar, como era de suponer, se solicita la notificación por cédula, procediéndose a la misma el día 21 de diciembre del año 2017, dejando COPIA ÍNTEGRA A PERSONA ADULTA DE SEXO MASCULINO, QUIEN NO DA SU NOMBRE Y SE EXCUSA DE FIRMAR POR ESTIMARLO INNECESARIO, nuevamente en el domicilio de mi representada, esto es, calle Aldunate N°710, departamento N°605, efectuado por el receptor don MAURICIO ULLOA DEL PRADO; d) El cuarto, respecto del requerimiento de pago, se efectúa en el supuesto domicilio del ejecutado, don RICHARD WILLIAMS CONTRERAS GIHA, no obstante tratarse, una vez más, del domicilio de mi representada, certificándose su realización en el domicilio calle Aldunate 710 Dpto. 605 de esta ciudad – Temuco -, agregando “diligencia que me fue imposible llevar a efecto debido a que adulta de SEXO MASCULINO de su mismo domicilio se opuso a la traba de embargo...”, efectuado por el receptor don MAURICIO ULLOA DEL PRADO; y e) El quinto intento de notificación, respecto del embargo propiamente tal, es realizado, otra vez, en calle Aldunate N° 710, Depto. 605 de esta ciudad, con el auxilio de la fuerza pública al verdadero ejecutado, don RICHARD WILLIAMS CONTRERAS GIHA, señalando la receptora, doña ROSA HERMINIA OLIVARES CERDA, “diligencia que no cumplí por haberse opuesto una persona adulta del mismo domicilio, DE SEXO FEMENINO, quien se identificó como doña CECILIA ANDREA SALAS URRUTIA, quien me manifestó que el demandado NUNCA HA SIDO NOTIFICADO EN ESTA DIRECCIÓN, ELLA HA VIVIDO SIEMPRE EN DICHO DOMICILIO.”. El último estampe rectorial (letra e)), siendo sucinto al señalar “no cumplí por haberse opuesto una persona adulta del mismo domicilio”, es el que motiva la presente acción, procediendo esta parte a narrar cómo es que acaecen los hechos que generaron en mis representadas un estrés y desasosiego que perdura hasta el día de hoy. 2. En efecto, el día 18 de abril del presente año 2018, la receptora judicial, doña ROSA OLIVARES, intentó trabar embargo sobre los bienes que guarnecen en el domicilio que habita mis representadas, siendo el que consta en la carpeta virtual y que supuestamente corresponde a don RICHARD CONTRERAS, hecho



Foja: 1

certificado de manera errada por el receptor y demandado, don MAURICIO ULLOA DEL PRADO. Lamentablemente, la situación que vivieron mis representadas fue de terror. Dicho día, ambas se disponían a almorzar, cuando el conserje les avisa por citófono: “una señora viene a embargar bienes en conjunto con carabineros.” Evidentemente mi representada, doña Cecilia Salas, no permitió que esto aconteciera por cuanto nada tienen que ver con el ejecutado de autos. La receptora le preguntó por RICHARD CONTRERAS y le pidió que abriera la puerta a fin de sacar fotografías para el embargo de los bienes que estaban dentro. Mi representada, Cecilia Salas, le explicó que estaba equivocada y que en dicho lugar no vive ni ha vivido RICHARD CONTRERAS alguno, que aquél era un vecino y que ella es la hija de la dueña del departamento y que vive ahí hace más de un año a la fecha. Seguramente, la receptora creyó que se trataba de un ardid a fin de evitar el embargo. Mi representada le mostró su poder, pero la receptora insistió en entrar y le dio orden al Carabinero de ingresar forzosamente. Por otro lado, en un comentario respecto a información privada que no era de su incumbencia, la receptora le dijo que no entendía que estuvieran dos mujeres si ella hablaba de su pareja. La verdad es que mis representadas son homosexuales, y mantienen vida en común, situación que no tenían por qué ventilar, pero que, dadas las circunstancias, se vieron forzadas a hacerlo. Se sintieron invadidas y vulneradas en su espacio más íntimo: su vida privada, hogar y familia. Entre el forcejeo, pasaron 40 minutos, aproximadamente. En el intertanto llega el padre de mi representada, don FREDY SALAS, quien es funcionario municipal, por ende, se encuentra cercano a dicho departamento. Finalmente, el carabinero entendió la situación y, en conjunto con la receptora, se retiraron del lugar. Al momento que mi representada, doña Cecilia Salas, sale del edificio con su padre, totalmente atrasada a su trabajo dado el problema que la diligencia había ocasionado, se encontraron nuevamente en el Hall del edificio con la receptora y el carabinero. Seguramente creyeron que se trataba del Sr. CONTRERAS, por ende, le pidieron el carnet de identidad al Sr. Salas, su padre. El padre de mi representada se negó porque ya se había identificado en el departamento. El carabinero insistió, diciéndole que se trataba de un “control de identidad”, amenazándolo con que se lo llevaría detenido si no exhibía su cédula. Mi representada convenció a su padre que accediera y lo mostrara, lo que finalmente hizo. El padre de mi representada, como es diabético, con la situación ocurrida se descompensó y debieron estabilizarlo. Es así como perdieron una tarde completa de trabajo. 3. Producto de lo anterior, dada la impotencia por la rabia y el mal rato pasado, se intentaron tres vías para solucionar el problema suscitado a mis representadas: a) Una primera vía administrativa, por la cual mi representada, doña Cecilia Salas, personalmente, concurrió a la entidad bancaria SOCIEDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, sucursal de Temuco, dado que no entendía, el porqué de la gestión iniciada en su casa y respecto de una persona que ni siquiera le es cercana, y que, conforme lo relatado, hubiese terminado decantando en los eventos ya expresados. Les explicó su malestar y sus perjuicios, dado que el episodio terminó ocasionándole inconvenientes en el ámbito laboral, emocional y social, lo cual se explicará detalladamente en acápite aparte de esta presentación. b) Una segunda vía administrativa, yendo al Primer Juzgado Civil de Temuco a pedir explicaciones del caso y que le informaran sobre el proceder de los receptores judiciales. En el Tribunal les señalaron que debían ejercer las acciones que correspondieran porque en el proceso ejecutivo se



Foja: 1

consignaba su dirección como la del Sr. Contreras, siendo que este último jamás ha vivido ahí; por otro lado, un Ministro de Fe había certificado que vivía en dicha dirección, lo que era grave en caso de ser falso. c) Una vía judicial, por la cual, en calidad de tercero excluyente, única vía para realizar presentaciones en la citada causa RIT C-5584-17, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, se solicita la nulidad de todo lo obrado dada la alta probabilidad de que se intentara trabar nuevamente embargo en bienes de mi representada, pues, como consta en la referida causa, no hubo rectificación alguna respecto del domicilio indicado, a la postre, calle Aldunate N° 710, departamento N°605. Vía que, lamentablemente, fue desestimada al no haberse procedido efectivamente al embargo. Así, habiendo agotado todas las instancias que permitían una solución rápida, sin obtener resultados favorables frente a un evidente perjuicio a las personas de mis representadas, es que, a fin de resarcir lo que en derecho corresponde, se inicia la presente acción. b) Acción u omisión culposa. No es ninguna novedad que los Receptores Judiciales son Ministros de Fe, así lo expresan los artículos 390 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Es por esta razón, que al obrar en las diligencias que se le encomiendan, tal como dispone el artículo 393, del citado cuerpo legal, “deben ceñirse a la legislación vigente, y dejar testimonio íntegro de ellas – las diligencias -, en los respectivos autos.”, continúa, en su inciso segundo, “Toda falsedad en un testimonio castigada por la ley llevará consigo la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones en la Administración de Justicia, sin perjuicio de las otras penas accesorias que procedan en conformidad con la ley.”. Como puede apreciarse de la simple lectura del mencionado artículo, al legislador le repugnan las falsedades de un testimonio en las que pueda llegar a incurrir este Ministro de Fe, haciéndose imperiosa la necesidad de que el mismo obre no sólo de forma diligente sino responsable y ética, independiente de lo gravosa o no que pueda ser la materia cuya diligencia se le encomienda. Y la razón es obvia, una mala actuación puede acarrear que el peso de una acción recaiga sobre una persona que nada tiene que ver con las partes del juicio, señalando, por ejemplo, un domicilio que no corresponde en el que posteriormente se procede al embargo y retiro de especies (v. gr, como ocurrió con mis representadas). En efecto, este mismo ejemplo ocurrió en la realidad, y ocurrió con mis representadas. La pregunta que surge de inmediato es, ¿podría haberse precavido el resultado de los hechos que le acontecieron? Evidentemente: aplicando la debida diligencia y cuidado en la gestión encomendada, y no sólo la que impone la ley sino a la emanada de la ética. El domicilio aportado consistía, como he señalado en el acápite a), en un conjunto de departamentos, pudiendo ser cualquiera de ellos el de la persona del ejecutado, cobrando aún más sentido el obrar diligentemente. Más gravoso se vuelve, si cabe, el asunto, por cuanto el instrumento en el que consta el testimonio del receptor, en este caso contenedor de la circunstancia de que supuestamente el domicilio en donde se notifica es precisamente el de mis representadas, tiene el carácter de instrumento público en los términos del artículo 1699 del Código Civil, o sea: “el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario”, el cual, debe entenderse en relación al artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, del Título VII de las actuaciones judiciales, que dispone: “de toda actuación deberá dejarse testimonio escrito en el proceso, con expresión del lugar, día, mes y año en que se verifique, de las formalidades con que se haya procedido, y de las demás indicaciones. A continuación, y previa lectura, firmarán todas las personas



Foja: 1

que hayan intervenido; y si alguna no sabe o se niega a hacerlo, se expresará esta circunstancia. La autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado del acto es esencial para la validez de la actuación.” Por cierto, que lo anterior ocurre, de manera que no existían razones para dudar de la veracidad respecto de los hechos constatados en el estampe receptorial, y seguir, erradamente, con un embargo que nunca debió haber tenido lugar. En resumen, la acción culposa se traduce en la falta del debido cuidado en el despliegue de la gestión encomendada a don MAURICIO ALEJANDRO ULLOA DEL PRADO, cuyo oficio genera el deber y la responsabilidad de que los testimonios o declaraciones de que es testigo o él mismo realiza, se ajusten con la realidad de los hechos que se reclaman. c) Daños provocados y vínculo de causalidad con la acción Como consecuencia del negligente despliegue en su labor, como ya se ha señalado, se procede a intentar trabar embargo en la propiedad que sirve de residencia a mis representadas, lo que ocasionó una serie de perjuicios del orden moral en su persona: 1. En primer lugar, el verse expuestas a una situación de la cual es un hecho públicamente conocido que a nadie le gustaría vivir. En efecto, como se ha señalado, en el acápite a), mis representadas se encontraban almorzando, sin esperar que un hecho así aconteciera, lo que le causó tal grado de aflicción y estrés que, además de perder el día completo de trabajo (18 de abril del presente año 2018), dejó de asistir por dos días más. 2. En segundo lugar, la descompensación que sufrió el padre de Cecilia Salas, don FREDY SALAS, quien adolece de diabetes y no debe – ni tenía porqué – sufrir episodios de estrés como el de concurrir a discutir hechos, como todo padre haría para proteger a sus hijos, que jamás debieron haber ocurrido, frente a funcionarios que, lamentablemente, no tuvieron la deferencia del buen trato. 3. Y, por último, y lo más grave, es la exposición pública a la que se vio expuesta mi representada en torno a su orientación sexual, por cuanto a la fecha había preferido mantenerlo en su esfera privada. No obstante, los hechos descritos en esta presentación en nada pasaron desapercibidos, siendo conocida ya su condición por sus vecinos, lo que jamás debió haber ocurrido. Quiero resaltar que el vínculo de causalidad se explica por sí mismo: el litigio ejecutivo hasta la fecha ha seguido su curso normal en el errado domicilio consignado, por la simple razón antes mencionada: siendo un instrumento público, no existían razones para dudar de la veracidad de que en él se expresa, tanto así que, probada las circunstancias esenciales para la notificación por cédula, - ejecutado en el lugar del juicio y cuál es su morada -, se procede a la misma. Dicha negligencia decanta en la traba de embargo respecto de los bienes de mi representada, lo que ocasiona los daños recién expresados. d) De la responsabilidad subsidiaria de la entidad bancaria BBVA 1. No debe obviarse la responsabilidad subsidiaria en que incurre la entidad bancaria, por cuanto los bancos no son sólo entidades monetarias que se limiten a prestar, guardar o mover dinero, sino que son entes de garantía, que deben actuar, dado el tipo de operaciones que realizan, de manera óptima, garantizando no sólo sus intereses personales sino además de quienes no son simples deudoras, pues al final del día, resultan ser sus propios clientes. 2. En efecto, el aportar un domicilio sin cerciorarse previamente de que éste efectivamente perteneciera a la persona de la que se pretende el cumplimiento ejecutivo de la obligación, es a lo menos, descuidado. El juicio ejecutivo, por su naturaleza, consta de trámites de carácter compulsivo, v.gr, el embargo con su posterior retiro de especies y realización de los bienes del deudor. El seguir adelante con un juicio de estas características



Foja: 1

genera un gran impacto a nivel emocional en casi toda persona (por no decir todas). Ciertamente el ejecutante está en todo su derecho de accionar de esta manera, así lo prescriben los artículos 2465 del Código Civil en relación al 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Pero es un deber mínimo dirigir su acción en contra de quien es REALMENTE EL DEUDOR. No hacerlo, en la calidad que tiene una entidad bancaria como acreedor por antonomasia, es faltar derechamente al cuidado mínimo que cualquier hombre medio aplicaría al mismo caso. 3. Dicha negligencia encuentra los mismos daños expresados en el acápite anterior, como también a la relación de causalidad entre aquella y éstos, los cuales esta parte da por enteramente reproducidos conforme al principio de economía procesal. El derecho. Los hechos recién expuestos y su coincidencia con los supuestos contemplados en los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, dan cuenta de que estamos ante un caso de responsabilidad extracontractual generadora de daño moral, por un actuar negligente y culposo de los demandados. La responsabilidad de la institución bancaria emana de un incumplimiento del deber general de cuidado exigible a una persona racional y prudente, concretado en este caso en haber continuado la tramitación del juicio ejecutivo sin haber revisado si estaba el domicilio aportado en el título ejecutivo correspondía o mantenía vigencia a la fecha. Lo mismo puede sostenerse de quien es el principal responsable, don MAURICIO ULLOA DEL PRADO, dada su calidad de ministro de fe, dando por establecidos hechos que en nada se condecían con la realidad lo que ocasionó perjuicios directos y morales a mi representada. Respecto a la legitimación pasiva exigida por las mismas normas, la sociedad bancaria es plenamente capaz, no encontrándose en ninguna de las hipótesis de incapacidad contempladas en el artículo 2319 del Código Civil y, a pesar de tratarse de una persona jurídica, pues estas también son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, por lo que son, a su vez, plenamente capaces de ser sujetos de responsabilidad civil extracontractual. Ahondando aún más, los individuos que actuaron a nombre de la persona jurídica, lo hicieron dentro de la esfera de sus atribuciones, por tanto, el mismo banco debe hacerse responsable de ellas y no las personas individuales que las llevaron a cabo. Y todavía más, existe norma expresa en el artículo 58 del Código Penal, al decir “por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afectara.” Por lo que no resiste mayor análisis la legitimación pasiva en este sentido de la entidad bancaria. Tanto más puede decirse de don MAURICIO ULLOA DEL PRADO, quien tampoco se encuentra en algunas de las hipótesis del referido artículo 2319, no operando como eximentes de la responsabilidad. Por otro lado, existe un daño moral provocado de carácter cierto, el que no ha sido indemnizado y que afectó y seguirá afectando hacia el futuro derechos e intereses legítimos de mis representadas, como la honra, el bienestar del que gozaba dentro de su familia, vecinos, amistades y trabajo, el verse expuestas públicamente a un acto que, si bien obedece a una etapa procesal en juicio ejecutivo normal, era, en el caso de marras, a todas luces improcedente, más si durante dicha gestión se ventilaron hechos que nada tenían que ver con el carácter del proceso. Por más que los daños alegados en el caso carezcan de materialidad, tal naturaleza no los exime de manera alguna en ser resarcidos, puesto que la ley sí los incorpora en el artículo 2329 del Código Civil; esta norma habla simplemente de “todo daño”, por lo que siguiendo las reglas de interpretación de los artículos 19 y siguientes del



Foja: 1

mismo cuerpo legal, cuando el legislador señala excepciones, lo hace siempre de manera expresa, no siendo, por cierto el caso, debiendo entenderse, en una exégesis armónica, la inclusión tanto del daño material como moral. También, como lo explicitamos al momento de tratar los hechos, el daño fue consecuencia necesaria de la acción que lo provocó (la continuación del juicio ejecutivo hasta el intento de embargo de bienes de mis patrocinadas). El vínculo de causalidad es innegable entre la conducta culposa y el daño, así, de haberse verificado oportunamente que ese NO era su domicilio, certificando al efecto, habrían operado las herramientas legales para el aporte de otro, hasta dar con el que correspondía. En cuanto a la culpa, estimamos que en la ejecución del hecho generador del daño es claro que faltó la debida diligencia exigible al receptor en su calidad de ministro de fe, don MAURICIO ULLOA DEL PRADO, y a la entidad bancaria BBVA al no cerciorarse de que el domicilio era el señalado en el título ejecutivo o al menos si seguía vigente, como ya lo hemos mostrado acabadamente antes y siendo redundante repetirlo ahora. Por último, destaco el carácter de la obligación de resarcimiento para la acción de autos. Se trata de una obligación que la doctrina ha llamado “concurrente”: varias personas resultan obligadas a un mismo objeto, pero sin que se aplique el régimen ni de las obligaciones solidarias ni el de las obligaciones simplemente conjuntas. Se trata de lo que la doctrina francesa ha llamado obligaciones in solidum y que la doctrina y legislación argentina denomina como “obligaciones concurrentes”. Las obligaciones concurrentes se asemejan a las solidarias en que los deudores pueden ser obligados a pagar el total de modo que pagando uno se libera a los otros. Pero se diferencian en que no se aplican los llamados efectos secundarios que son propios de la unidad obligacional de la solidaridad, porque las concurrentes son obligaciones diferentes que sólo coinciden en el objeto debido. Así, por ejemplo, demandado uno de los deudores concurrentes esa demanda no puede invocarse como interrupción de la prescripción de otro, como sí puede hacerse entre codeudores solidarios (art. 2329 CC). La alternativa de las obligaciones concurrentes permite dar una respuesta que no rompe con el principio dogmático de que la solidaridad no se presume, sin menoscabar el derecho de la víctima a cobrar el total del daño contra el civilmente responsable, aunque haya también interpuesto la demanda contra el autor directo. Indemnización. Por todo lo anterior, esta parte solicita que se indemnice a mis representadas en la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos) con el propósito de enmendar, en la medida que se pueda, un daño que posiblemente permanezca para siempre”.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 1437, 2284, 2316, 2314. 2320 y siguientes del Código Civil, artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; así como demás normas pertinentes, piden acoger la demanda de indemnización de perjuicios en contra de don MAURICIO ALEJANDRO ULLOA DEL PRADO y de la SOCIEDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, representada por su Gerente General, don MANUEL OLIVARES ROSSETTI, todos ya individualizados, declarando expresamente: a) Que se condene a las demandadas a pagar la suma única de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), por concepto de daño moral. b) Que se condena en las calidades expuestas, a pagar todas las cantidades referidas en la letra a) con intereses corrientes desde el 18 de abril del año en curso (fecha en que se procede al intento de embargo), más reajustes según el índice de precios al consumidor desde que se encuentre





«RIT»

Foja: 1

ejecutoriada la sentencia de término hasta su pago efectivo, o desde la fecha que el tribunal determine conforme el mérito de autos, todo más expresa condenación en costas en caso de oposición. b) En subsidio de lo anterior, en las calidades señaladas respecto de los demandados, se les condenen al pago de las cantidades que el tribunal estime pertinentes por los daños que se determinen, conforme al derecho aplicable al caso en razón de los principios de justicia y equidad, todo más expresa condenación en costas en caso de oposición. c) En subsidio de todo lo anterior, solicito se acceda a la demanda en la forma, mérito y por los montos que el tribunal estime pertinentes como conocedor del derecho, todo más expresa condenación en costas en caso de oposición.

CUARTO: Que con fecha 06 de octubre de 2018 la demandante subsana la demanda señalando que desconocía la fusión de los bancos, siendo el ex BBVA en la actualidad BANCO SCOTIABANK CHILE, hecho que ocurre por la fecha en la que se presenta la demanda en donde, hasta ese entonces, dicha circunstancia no era de conocimiento para la parte, de manera que ciertamente es un defecto que impediría el desarrollo normal de la controversia de autos por lo que, no existe otra alternativa más que corregir el libelo. En razón de lo anterior, pide tener como demandada de la presente acción a BANCO SCOTIABANK CHILE S.A, RUT 97.018.000-1, sociedad anónima bancaria y financiera, representada por su gerente actual, don FRANCISCO SARDÓN DE TABOADA, ambos con domicilio en calle Morandé N° 226, piso 8°, comuna y ciudad de Santiago.

QUINTO: Que con fecha 23 de noviembre de 2018, don Patricio Mackenna Cortés, abogado, por el demandado Scotiabank Chile S.A. contestó la demanda, solicitando su total rechazo con costas por los argumentos que expone al siguiente tenor:

“1. SINTESIS DE LOS HECHOS IMPUTADOS EN LA DEMANDA / DEFENSA NEGATIVA. A fin de hacer efectiva una inexistente responsabilidad EXTRACONTRACTUAL SUBSIDIARIA de mi representada, la contraria ha presentado una versión incompleta de los hechos, pretendiendo así crear una situación de aparente negligencia del Banco en los hechos de este juicio. Al respecto esta parte plantea una defensa negativa, controvirtiendo todos y cada uno de los hechos de la demanda y sus fundamentos, los que, en consecuencia, deben ser acreditados por la parte que los alega. Iniciaremos nuestra exposición mediante un relato lo más cronológico posible para facilitar el seguimiento, comentando los hechos particulares del juicio y finalmente las equívocas imputaciones de responsabilidad efectuadas por la contraria actor. 1.1. CIRCUNSTANCIAS PREVIAS. Antes de efectuar un análisis particular, es necesario que US. tenga presente las siguientes circunstancias, las cuales en su conjunto permitirán comprender los hechos del juicio en su verdadero contexto. 1.1.1. Declaración del deudor demandado y actuación del Ministro de Fé señor Ulloa. Conforme a los antecedentes que aportaremos oportunamente, el señor Richard Contreras Giha, demandado por el Banco en autos ejecutivos Rol N° 5584-2017 seguidos ante el 1° Juzgado Civil de esta ciudad, al pedir a mi representada el crédito impago que derivó en la demanda respectiva, señaló como su domicilio el ubicado en “Aldunate 710 Temuco”. Así consta en el documento denominado “Crédito de Consumo” suscrito por el señor Contreras con fecha 29 de noviembre de 2016. Cuando correspondió elaborar la demanda por el no pago del crédito contraído, mi representada, actuando con absoluta bue fe y de manera



Foja: 1

del todo diligente, consignó como domicilio el mismo que el señor Contreras había señalado en su solicitud de crédito de consumo. Pues bien, cuando el Receptor Judicial demandado en estos autos, funcionario auxiliar de la administración de justicia, en cuyo nombramiento mi representada por cierto no tiene ninguna injerencia, por encargo de la ejecutante concurre al domicilio señalado por el deudor, que en los hechos corresponde a un edificio, certifica haberlo buscado en días y horas distintas en el “departamento 605” del edificio ubicado en Aldunate 710 de esta ciudad. Lo anterior, pese a que en ningún momento mi representada había señalado ser ese el departamento del ejecutado. De hecho, ignoramos de qué modo obtuvo el señor Ulloa esa información. Fue así como con fecha 12 y 13 de diciembre pasado, el Ministro de Fe aludido certifica haber sido informado por una persona adulta de sexo femenino que ese era el domicilio del deudor y que se encontraba en el lugar de juicio. Luego de estampar las búsquedas y habiéndolo autorizado el Tribunal a cargo de la ejecución, el mismo Receptor notificó la demanda de conformidad a lo previsto en el artículo 44 del CPC, con fecha 21 de diciembre de 2017. No debemos olvidar que el artículo 427 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil estatuye que los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe en virtud de orden del tribunal competente SE PRESUMEN VERDADEROS, salvo prueba en contrario. Cuatro meses después de haberse estampado las búsquedas y notificarse la demanda en un departamento que -tal como se supo posteriormente-, no era el del deudor, con fecha 18 de abril de este año, previa autorización del Tribunal, se concurrió esta vez por la receptora judicial doña Rosa Olivares Cerda al domicilio tantas veces señalado, a fin de trabar embargo con el auxilio de un funcionario de Carabineros, no habiéndose llevado a cabo la diligencia luego de oídas las explicaciones dadas por doña Cecilia Salas Urrutia a la Ministro de Fe señalada. No corresponde a esta parte calificar intenciones ni juzgar actuaciones de auxiliares de la administración de justicia en el desempeño de sus labores, por lo que nos abstendremos de especular respecto de las razones del proceder del Ministro de Fe demandado. Lo único cierto es que tras la información que por sí y ante sí proporciona el señor Ulloa en tres ocasiones (dos búsquedas y una notificación), misma que debe presumirse verdadera según se ha dicho, resulta afectado el Tribunal a cargo de la ejecución, en cuanto autoriza practicar una notificación personal subsidiaria y, además, ordena se trabe embargo con fuerza pública. Igualmente afectada resulta mi representada, al verse enfrentada hoy a un millonario juicio cuyo origen lo encontramos en la actuación de un auxiliar de la administración de justicia, en la cual ninguna participación tuvo el Banco. 1.1.2. Responsabilidad por el hecho propio. Responsabilidad subsidiaria invocada. A objeto de delimitar adecuadamente el marco de la discusión, debemos comenzar aclarando que lo que se imputa por la contraria, tanto al Receptor señor Ulloa como a mi representada, es la supuesta responsabilidad extracontractual por el hecho propio, quedando así descartada alguna imputación que por el hecho ajeno pudiera intentarse a estas alturas en contra del Banco, en virtud de lo previsto en el artículo 2320 y siguientes del C. Civil. Por otro lado, se atribuye al Banco una inexistente responsabilidad de carácter SUBSIDIARIA, esto es, aquélla que puede hacerse efectiva sólo una vez agotados todos los medios para el cobro respecto del demandado principal, esto es, el señor Ulloa. Tenemos, en consecuencia, que lo que se le reprocha a mi representada es no haber confirmado que el domicilio señalado en la demanda haya correspondido efectivamente al del deudor, en tanto



Foja: 1

que al señor Ulloa se le imputa un hecho distinto, cual es, haber faltado a la verdad al informar que el departamento 605 correspondía al domicilio del deudor señor Contreras. De ahí entonces que la demandante NO haya invocado la responsabilidad solidaria que reconoce el artículo 2317 del C. Civil, pues indudablemente no se daba la unidad del hecho ilícito en la que se funda el precepto que impone solidaridad a los coautores de un delito o cuasidelito civil (C. Sup. 27 de junio de 2018, rol N° 38145-2017). No obstante ello, de manera errada según se dirá más adelante, la contraria invoca una responsabilidad subsidiaria que denomina “concurrente”, en circunstancias que, si alguna hay, lo es de naturaleza simplemente conjunta. En lo que se refiere al hecho imputado al Banco, se debe aclarar que éste no indicó un domicilio erróneo, sino que, basado en la información proporcionada por el propio deudor, consignó en la demanda el domicilio que este señaló, mismo que si bien correspondía al edificio en el que habitaba, no precisaba el número de departamento, cuestión esta última que, según se dirá, bajo ningún aspecto puede tenerse como causa del supuesto daño.

1.2. Desempeño indebido del Receptor Judicial como causa del supuesto daño. Según hemos explicado, el señor Ulloa, en su calidad de Ministro de Fe y en el ejercicio de una labor que le encomienda la ley, en la cual mi representada no tiene capacidad ni posibilidad de supervisión alguna, informa erróneamente al tribunal ante el cual se sigue el juicio ejecutivo, que el deudor vive en el departamento 605 del edificio de calle Aldunate 710 de Temuco. En razón de la presunción legal de veracidad que alcanza a las actuaciones del receptor, ello no sólo induce a error a mi representada, que no tiene por qué asumir que el Ministro de Fe informa algo que no es correcto, sino que, peor aún, induce a error al propio Tribunal, el cual accede, en primer lugar, a que se notifique por el artículo 44 del CPC en un domicilio que -según se supo después, no era el del ejecutado, para luego ordenar trabar embargo con auxilio de la Fuerza Pública en dicho lugar. Insistimos en que todas esas actuaciones se llevan a cabo porque el Tribunal las autoriza. Con la misma liviandad con que la actora atribuye responsabilidad a mi representada en un hecho en que no le cabe participación alguna, podría atribuirse igual responsabilidad al Tribunal a cargo de la ejecución. No cabe duda S.S. que el origen del problema lo encontramos en la información errónea que aporta el Ministro de Fe, respecto de cuyas actuaciones opera una presunción de veracidad. Esta información induce, por un lado, al Banco a seguir adelante con la ejecución y, por el otro, al propio Tribunal a ordenar notificar en virtud del artículo 44 del CPC y más tarde a trabar embargo con el auxilio de la Fuerza Pública, según se ha dicho.

1.2. CUMPLIMIENTO DILIGENTE POR PARTE DEL BANCO AL DEDUCIR SU DEMANDA EJECUTIVA. Según hemos señalado, el Banco, valiéndose de la información proporcionada por el deudor, consigna en la demanda el domicilio por éste aportado en la solicitud de crédito de consumo debidamente suscrita. Al respecto manifiesta la actora que mi representada debió haber verificado el domicilio en cuestión. Dicha obligación que caprichosamente impone la contraria al Banco, no tiene sustento legal ni de ninguna otra naturaleza. En efecto, ninguna disposición legal ni reglamentaria obliga a un Banco a confirmar que el domicilio aportado por el contratante de un crédito sea el que efectivamente se señala. Ello es así por cuanto, además de carecer de todo sentido, pues nada impide a un deudor cambiar de domicilio cuantas veces quiera, el único afectado es el propio Banco, que tendrá que ubicar al deudor para efectos de poder notificarlo. Aquí radica precisamente la importancia de la función de un



Foja: 1

Receptor, ya que será él y sólo él quien, salvo que practique una notificación personal, dará cuenta de si una persona vive en determinado lugar y además si se encuentra o no en el lugar del juicio. 1.3. CONCLUSIONES DE HECHO. Sin perjuicio de la defensa negativa planteada en estos autos, de acuerdo a lo expuesto, podemos afirmar de forma absolutamente tajante, que los hechos relatados y las apreciaciones que de ellos hace la actora en su libelo y que sirven de fundamento para su pretendido derecho a ser indemnizada, NO SON EFECTIVOS, al menos en lo que a la responsabilidad del Banco se refiere. 2. EXCEPCIONES, ALEGACIONES, DEFENSAS Y ARGUMENTOS DE DERECHO. A continuación pasamos a transformar los diversos argumentos y elementos de hecho en excepciones, alegaciones y defensas concretas, sobre las cuales deberá pronunciarse oportunamente el tribunal y a propósito de las mismas procederemos a incorporar los diferentes fundamentos de derecho que hacen totalmente improcedente la demanda de autos y que respaldan jurídicamente nuestras aseveraciones al respecto. 2.1. HECHOS DE LA DEMANDA NO SON EFECTIVOS. Como primera excepción sustancial de fondo, y remitiéndonos a lo indicado precedentemente, señalamos que los hechos no son efectivos según lo descrito en la demanda, por lo cual no se configura responsabilidad civil alguna respecto de esta parte. La contraria deberá probar sus aseveraciones, lo que sin duda no le será posible. 2.2. FALTA DE LA LEGITIMACION ACTIVA PARA DEMANDAR COMO VICTIMA DEL DAÑO. En la página 3 de la demanda se señala que “El último estampe receptorial (letra e)), siendo sucinto al señalar “no cumplí por haberse opuesto una persona adulta del mismo domicilio”, es el que motiva la presente acción, procediendo esta parte a narrar cómo es que acaecen los hechos que generaron en mis representadas un estrés y desasosiego que perdura hasta el día de hoy”. (El subrayado y destacado en negrilla es del suscrito). En el estampe receptorial señalado, la Receptora señor Rosa Olivares hace referencia solamente a doña Cecilia Salas Urrutia, y no menciona en ningún momento a la también demandante doña Claudia Besnier Calderón. De este modo y radicando la propia demandante el origen del daño en la diligencia llevada a cabo por la señora Olivares (que no se materializa), no se entiende cómo esa gestión pudo haber afectado a la señora Besnier, legitimándola para demandar como en la especie lo ha hecho. 2.3. EXCEPCION DE AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN PASIVA POR PARTE DEL BANCO. El Banco no ha tenido, ni ha podido tener participación alguna en los hechos que han producido el supuesto daño cuyo resarcimiento se pretende. La propia actora ubica el origen del daño en la diligencia de embargo con fuerza pública -que no se materializó-, misma en la que cual mi representada no tuvo participación directa ni indirecta. Si bien es cierto que fue el Banco quien pidió que se llevara a cabo, ello fue así porque el Ministro de Fe, cuyas actuaciones la ley presume verdaderas, informó que ese era el domicilio del deudor, lo que indujo al Tribunal a autorizar la diligencia referida. 2.3.1. INIMPUTABILIDAD DE MI REPRESENTADA POR NO CONCURRIR LOS REQUISITOS RESPECTIVOS: Conforme sostiene don Arturo Alessandri R. “Las personas jurídicas son personal y directamente responsables de un delito o cuasidelito, sea de acción u omisión, cuando éste se ha sido cometido por sus órganos, esto es, por las personas naturales o por los consejos en quienes reside la voluntad de la persona jurídica, según la ley o los estatutos” (el subrayado es nuestro) (Arturo Alessandri R., Teoría de la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Tomo 1, p. 153.) Continúa señalando este autor que “el



Foja: 1

órgano es la encarnación de la persona jurídica: los actos del órgano son, por lo tanto, actos de la persona jurídica misma”. Agrega luego que “para que así ocurra, es menester que el órgano obre en ejercicio de sus funciones, es decir, dentro de las facultades que le competen o en virtud del acuerdos celebrados con conformidad a los estatutos o a la ley; sólo entonces encarna la voluntad de la persona jurídica (art 552 C.C.). De lo contrario, ésta no contrae responsabilidad”. Como S.S. puede ver, para los efectos de determinar la responsabilidad de una persona jurídica, es esencial identificar al órgano ejecutor material del hecho ilícito (según Alessandri las personas naturales o consejos en quienes reside la voluntad de la persona jurídica). Al no haber señalado la contraria cuál habría sido la persona (órgano) que incurrió en la acción u omisión ilícita que identifica como la causante del daño, no es posible determinar si obró dentro de las facultades que le competían. Mucho menos se puede establecer si gozaba de la capacidad necesaria para actuar. A este respecto, el mismo Alessandri concluye que se derivan dos consecuencias importantes. La primera, “que si el órgano es incapaz de delito o cuasidelito según el artículo 2319, la persona jurídica también lo es...” La segunda, “que la víctima debe probar la culpa o el dolo del órgano o, mejor dicho, de la persona jurídica, de acuerdo con las reglas generales...El art. 2320 es inaplicable, se refiere a la responsabilidad por el hecho ajeno de un dependiente, y el órgano no lo es”. (El subrayado y el destacado en negrilla es del suscrito). Tenemos en consecuencia que la contraria debió haber identificado al órgano que obró por la persona jurídica, pues sólo así es posible establecer si se trata de un órgano capaz, por un lado, y de un órgano que actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, por el otro.

2.4. CUMPLIMIENTO DILIGENTE DE DEBERES DEL BANCO. AUSENCIA DE OMISION CULPABLE. INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA.

2.4.1. Ausencia de omisión culpable por parte del Banco. Tal como se ha venido diciendo, el domicilio consignado en la demanda es el que el propio deudor informó al suscribir la solicitud de crédito. Por otro lado, el domicilio indicado no era erróneo como pretende hacer creer la actora, sino que incompleto, pues no precisaba cual era el departamento que servía de habitación al demandado. Era el Ministro de Fe el llamado a informar que el domicilio aportado correspondía a un edificio o bien, hechas las averiguaciones en el mismo, estampar las búsquedas donde correspondía y no en el departamento de un tercero distinto. Con todo, y tal como se indicará con mayor detalle más adelante, ya se ha dicho que el señalamiento de determinado domicilio en una demanda no puede ser causa directa y necesaria de daño alguno. Ello por cuanto, antes de notificar, el Ministro de Fe tiene la obligación de informar si ese es efectivamente el lugar que le sirve de morada al demandado y, además, si se encuentra en el lugar del juicio.

2.4.2. Inexigibilidad de otra conducta. Sin haber identificado al órgano que habría incurrido en la acción u omisión ilícita, la contraria pretende atribuir responsabilidad a mi representada por no confirmar previamente si el domicilio aportado por el deudor correspondía efectivamente a aquél en el que vivía. Al no haber la contraria identificado al órgano que tenía la supuesta obligación de confirmar el domicilio señalado por el deudor, no podrá hacerse efectiva la responsabilidad de la persona jurídica según ya se ha dicho. Con todo, siguiendo el argumento de la contraria, querría decir entonces que cada vez que un Receptor Judicial stampa búsquedas negativas, la persona que habita el domicilio indicado en la demanda estaría legitimado para demandar al acreedor por no haber confirmado o actualizado la información antes de accionar



Foja: 1

judicialmente. Esto S.S. no resiste el menor análisis. Ya se ha dicho que si algún daño se generó a la actora, fue producto del accionar del Ministro de Fe que incurrió en un error al estampar las búsquedas y posteriormente notificar la demanda en un domicilio distinto al del deudor. Mi representada actuó siempre de buena fe y de manera diligente, no siéndole exigible otra conducta. En efecto, consignó en la demanda el domicilio aportado por el deudor y solicitó que se notificara por el art. 44 del CPC., cuando el Ministro de Fé informó, en dos ocasiones, que el departamento 605 del edificio de calle Aldunate 710 de Temuco, correspondía a su domicilio.

2.5. EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD POR HECHO DE LA PROPIA VICTIMA COMO CAUSA CONTRIBUYENTE DEL EVENTO. Ya se ha dicho que el embargo se trabó cuatro meses después de haber estampado las búsquedas y notificado el Ministro de Fé. Asumiendo que es efectivo lo que éste señala (presunción de veracidad que opera en su favor según el artículo 427 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil) en cuanto a que se habría entrevistado con una mujer adulta y que esta correspondía a una de las dos demandantes, no se entiende entonces por qué éstas esperaron a que se concurriera a trabar el embargo con el auxilio de la fuerza pública, para advertir al Tribunal del error en que se estaba incurriendo. No debe olvidar S.S. que la contraria, tal como expone en su demanda, incidenta de nulidad recién el 7 de mayo de este año, en circunstancias que ya habían tenido contacto con el receptor y habían recibido las copias de la demanda según relata el Ministro de Fe. Respecto del incidente hay que aclarar, además, que fue rechazado por cuanto se estimó que no siendo parte y no habiéndose materializado el embargo –en cuyo caso procedía intentar la respectiva tercería-, no existía perjuicio alguno que pudiera ser subsanado con la declaración de nulidad. La innecesaria e inexplicable demora de la contraria en concurrir al Tribunal o incluso al propio Banco para informar del error en que estaba incurriendo el Ministro de Fe, hubiesen bastado para evitar cualquier daño. La ausencia de culpa de parte del Banco sin duda obliga a rechazar la demanda. Con todo, si S.S. fuese de la idea de que sí existe responsabilidad por el sólo hecho de consignar en la demanda el domicilio que propio deudor señaló al pedir el crédito, tenemos de todos modos que art. 2330 del C. Civil prevé una disminución proporcional de la apreciación del daño, en el evento de estimarse que ha existido una exposición imprudente al mismo.

2.6. EXIMIENTE DEL HECHO DE TERCEROS COMO CAUSANTE DEL ACCIDENTE. Alegamos la culpa de un tercero como es el Receptor señor Ulloa, como eximente de responsabilidad en favor del Banco. Ya se ha dicho que sólo al Ministro de Fe le corresponde certificar si el deudor vive o no en el domicilio que se señala en la demanda. De lo que él informe se desencadenan una serie de actuaciones procesales, tanto del ejecutante como del propio Tribunal, que no hubiesen podido generarse si el Receptor hubiese informado lo que en realidad correspondía conforme le ordena la ley.

2.7. NO CONCURRENCIA EN GENERAL DE LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL INVOCADA. Para que pudiese existir una acción emanada de las normas sobre responsabilidad extracontractual, es necesario que concurren TODOS los requisitos legales que establece el Código Civil, doctrina y jurisprudencia nacionales, para que se configure la responsabilidad subjetiva del Banco, mismos que analizaremos en los párrafos siguientes. Estos requisitos y exigencias legales ya han sido referidos mediante la configuración de las excepciones antes mencionadas, pero resulta pertinente de todos modos mencionarlos nuevamente, para asistir a US. en la



Foja: 1

tarea de determinar si concurren o no en este caso en particular. 2.10.1. Hecho dañoso. No se podrá probar ningún hecho, por acción u omisión, de la cual puedan derivarse los perjuicios que dice sufrir la demandante, imputables al Banco. De este modo, es claro y evidente que no existe ninguna acción u omisión de la cual pudiera surgir responsabilidad extracontractual para mi representada, no bastando la mera atribución de responsabilidad si ella no surge de un hecho concreto, cierto y probado en autos, junto con el señalamiento preciso del órgano que, en los hechos, habría incurrido en la materialización de la acción u omisión en cuestión. Ya se ha dicho que la diligencia de embargo a partir de la cual la contraria reconoce la generación del supuesto daño, NO SE MATERIALIZÓ, tal como consta del estampe de la receptora señora Rosa Olivares Cerda. Por lo tanto, no se vislumbra cuál sería el perjuicio causado. La actora afirma que habría quedado expuesta su condición de homosexual, cuestión que habría vulnerado su intimidad. Lo cierto es que sin perjuicio de que esta parte considera que la condición sexual de una persona no puede de modo alguno derivar en causa de indignidad de ninguna especie, de lo que se expone en la demanda aparece claramente que fue la propia señora Salas quien hizo presente a la Receptora su condición de homosexual. Si se sentía más cómoda ocultándolo, nada ni nadie la obligaba a reconocerlo. 2.10.2. No existe culpa o dolo de la demandada. Para que exista la responsabilidad extracontractual, no basta con que exista alguna conducta dañosa, sino que es necesario que dicha conducta haya sido realizada con dolo, es decir con intención positiva de causar un daño o perjuicio a una persona con la cual no existe ningún vínculo adicional, o bien es necesario que el daño se produzca porque el autor del hecho dañoso (un órgano específico en el caso de las personas jurídicas), actúe con negligencia, imprudencia o impericia, y que como consecuencia de ello, se provoque un perjuicio a la víctima. Se encuentra ausente en el caso de marras el elemento subjetivo de imputabilidad, por lo que la responsabilidad extracontractual que se pretende no se ha configurado y por ello la demanda y la indemnización requerida son improcedentes. 2.10.3. Imposibilidad de referirse a la capacidad, por no haberse identificado al autor material (órgano) del hecho ilícito imputado. Ha fallado la contraria en identificar o mencionar a la persona (órgano) que concretamente ha cometido el supuesto ilícito por parte del Banco, para así poder analizar debida y oportunamente si la misma tenía capacidad cuasidelictiva civil al momento de los hechos. Ya se ha dicho más arriba que, conforme sostiene don Arturo Alessandri R. “Las personas jurídicas son personal y directamente responsables de un delito o cuasidelito, sea de acción u omisión, cuando éste se ha sido cometido por sus órganos, esto es, por las personas naturales o por los consejos en quienes reside la voluntad de la persona jurídica, según la ley o los estatutos” (el subrayado es nuestro) (Arturo Alessandri R., Teoría de la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Tomo 1, p. 153.). Continúa señalando este autor que “el órgano es la encarnación de la persona jurídica: los actos del órgano son, por lo tanto, actos de la persona jurídica misma”. Agrega luego que “para que así ocurra, es menester que el órgano obre en ejercicio de sus funciones, es decir, dentro de las facultades que le competen o en virtud del acuerdos celebrados con conformidad a los estatutos o a la ley; sólo entonces encarna la voluntad de la persona jurídica (art 552 C.C.). De lo contrario, ésta no contrae responsabilidad”. Como S.S. puede ver, para los efectos de determinar la responsabilidad de una persona jurídica, ese esencial identificar al órgano ejecutor material del hecho



Foja: 1

ilícito (según Alessandri las personas naturales o consejos en quienes reside la voluntad de la persona jurídica). Al no haber señalado la contraria cual habría sido la persona (órgano) que incurrió en la acción u omisión que identifica como la causante del daño, no es posible determinar si obró dentro de las facultades que le competían. Mucho menos se puede establecer si gozaba de la capacidad necesaria para actuar. A este respecto, el mismo Alessandri concluye que se derivan dos consecuencias importantes. La primera, “que si el órgano es incapaz de delito o cuasidelito según el artículo 2319, la persona jurídica también lo es...” La segunda, “que la víctima debe probar la culpa o el dolo del órgano o, mejor dicho, de la persona jurídica, de acuerdo con las reglas generales...El art. 2320 es inaplicable, se refiere a la responsabilidad por el hecho ajeno de un dependiente, y el órgano no lo es”. Tenemos en consecuencia que no concurre el requisito de la “capacidad”, ya que la contraria, al no haber identificado al órgano que obró por la persona jurídica, hizo imposible establecer si se trata de un órgano capaz, por un lado, y de un órgano que actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, por el otro.

2.10.4. Ausencia de Perjuicio. Nexo causal inexistente. Nos referiremos separadamente a este punto, por su importancia.

3. ANALISIS DE LOS PERJUICIOS DEMANDADOS EN AUTOS. En el párrafo c) de la página 7 de su demanda, la actora se refiere a los “daños provocados y vínculo de causalidad con la acción”. Las peticiones de la contraria respecto de los supuestos perjuicios sufridos son completamente improcedentes, se refieren a perjuicios inexistentes, o no relacionados con los hechos de autos ni con esta parte, sin nexo causal y, en todo caso se encuentran completamente sobre valorizados. Afirma la demandante que al “intentar trabar embargo” en la propiedad que le sirve de residencia, se ocasionó una serie de perjuicios del orden moral. Como primera cuestión, tenemos que el origen inmediato del daño lo ubica la contraria en un “intento de embargo”, cuestión que de inmediato permite hacerse una rápida idea de la extensión del supuesto daño al que se refiere. Señala la contraria que habría perdido un día completo de trabajo, además de haber dejado de asistir durante dos días más. A este respecto tenemos, en primer lugar, una evidente indeterminación del daño en lo que al sujeto pasivo (víctima) se refiere. En efecto, se demanda por dos personas y, por lo mismo, se ignora quien perdió los días de trabajo señalados. En segundo término, se reclama por la descompensación que sufrió el padre de Cecilia Salas, “quien adolece de diabetes y no debe – ni tenía porqué – sufrir episodios de estrés como el de concurrir a discutir hechos, como todo padre haría para proteger a sus hijos, que jamás debieron haber ocurrido, frente a funcionarios que, lamentablemente, no tuvieron la deferencia del buen trato”. Respecto a este daño, resulta evidente que si quien lo sufrió fue el padre de la señora Salas, debió haber sido él entonces quien demandara, al menos por este concepto, cosa que no hizo. Resulta evidente entonces la falta de legitimidad activa de las actores respecto de este punto en cuestión. En último lugar y en lo que califican como “lo más grave”, mencionan “la exposición pública a la que se vio expuesta mi representada en torno a su orientación sexual, por cuanto a la fecha había preferido mantenerlo en su esfera privada. No obstante, los hechos descritos en esta presentación en nada pasaron desapercibidos, siendo conocida ya su condición por sus vecinos, lo que jamás debió haber ocurrido”. Como S.S. puede ver, la contraria identifica la consecuencia más dañosa, en el hecho de hacerse pública su condición sexual. A este respecto y tal como se ha dicho, fue la propia señora Salas quien, sin tener motivo alguno para hacerlo, hace presente que la





Foja: 1

persona que aparentemente vivía con ella era su pareja. De ser efectivo, se habría enterado de ello sólo la receptora judicial y el funcionario de Carabineros que concurrió a la diligencia. No se entiende por qué los vecinos de la demandante debieron haberse enterado. Al menos de lo relatado por la contraria, no aparece que haya habido vecinos presentes ni que haya gritado a los cuatro vientos su condición sexual, cuestión que habría permitido a terceros enterarse de lo que supuestamente las actoras querían mantener en secreto. Esta parte ya ha hecho presente que la condición sexual de una persona jamás puede ser causa de vergüenza o indignidad. Con todo, si las actoras, en el uso de su legítimo derecho preferían no hacerlo público, hubiera bastado con que la señora Salas nada dijera al respecto. No parece razonable -ni la ley lo ampara-, responsabilizar a terceros por el hecho de la propia víctima. Es doctrina constante de los autores, que la culpa exclusiva de la víctima exonera de responsabilidad al demandado. En este sentido, tal como señala don Arturo Alessandri R. en la obra ya citada "La culpa de la víctima, que puede ser de acción u omisión y que se aprecia en conformidad a los mismos principios que la del autor del daño, es causa eximente de responsabilidad siempre que sea la causa exclusiva del daño. De lo contrario, sólo autoriza la reducción de la indemnización (Art. 2330). Y es causa exclusiva del daño cuando éste proviene de la culpa de la víctima exclusivamente, sea porque no la hubo de parte del demandado o porque si la hubo de su parte, no existe relación causal entre ella y el daño. Son casos de culpa exclusiva de la víctima aquellos en que las leyes, por razones de prudencia prohíben ciertos actos" (A. Alessandri, Responsabilidad Extracontractual. pág. 614). La jurisprudencia nacional, en innumerables sentencias ha recogido el mismo principio. La Excm. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 11 de noviembre de 1993, acoge queja en contra sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción y confirma la de primera instancia que había resuelto que no cabe la indemnización porque las pruebas del caso "son contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales y coincidentes en declarar que el accidente por el que se declara el daño moral, fue culpa del actor y su propio descuido. De modo que no probada alguna acción u omisión culpable o dolosa ni la responsabilidad de la demandada, no corresponde acoger la demanda" (Revista LABORAL. Seguridad Social, N° 33, junio 1994, págs, 43 y siguientes). Pues bien, en el caso de autos es claro que el hecho perjudicial consistente en haber trascendido la condición sexual de las actoras, y que ellas reconocen como "lo más grave", se debió a su exclusiva culpa. En efecto, sin haber ninguna necesidad de revelar lo que las demandantes habrían supuestamente decidido mantener en secreto, la señora Salas, sin existir motivo grave alguno que justificara hacerlo, supuestamente revela a la receptora judicial lo que, según aquélla expone, debió haberse mantenido en la esfera de la intimidad con su pareja. ¿Cómo se aprecia la culpa de la víctima? Existe consenso en que la culpa de la víctima se aprecia en conformidad a los mismos principios que la del autor del daño. Habrá culpa cuando la víctima no haya obrado con el cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios. La hay asimismo, si la víctima omite hacer lo necesario para precaverse del daño o para aminorar sus consecuencias, pudiendo hacerlo. En otros términos, la conducta de la víctima se aprecia en base a un criterio in abstracto, en comparación con el comportamiento que habría observado, en las mismas circunstancias, un individuo medianamente prudente. En el caso que nos ocupa, si para las actoras era tan importante que no se supiera que eran homosexuales, debió entonces



Foja: 1

simplemente haber callado. Ahora bien, cómo se habrían enterado los vecinos, si es que efectivamente lo hicieron, simplemente lo ignoramos puesto que en la relación de los hechos no hay nada que lo explique. - En cuanto al nexo causal o vínculo de causalidad: La contraria indentifica el vínculo de causalidad entre hecho culpable y resultado dañoso, en el juicio ejecutivo referido más arriba, seguido en contra del deudor Richard Contreras Giha. Según la actora, el hecho negligente de consignar un domicilio errado “decanta en la traba de embargo respecto de los bienes de mi representada, lo que ocasiona los daños recién expresados”. En primer lugar ya se ha dicho que el domicilio señalado en la demanda NO ERA EL DE LAS ACTORAS. Fue el receptor demandado quien, en el ejercicio de sus funciones, informó que el departamento del deudor era el N° 605, cuestión que, según se supo al concurrirse a la diligencia de embargo, no era efectivo. Tenemos de este modo que no podemos encontrar en el señalamiento del domicilio que se indica en la demanda ejecutiva, el origen de los perjuicios. Sobre todo si efectivamente corresponde al edificio donde tiene o tenía su domicilio el deudor. En segundo lugar, EL EMBARGO NUNCA SE TRABÓ. De ese modo no puede reconocerse en el embargo el hecho que ocasionó los daños que se mencionan. Señala don Arturo Alessandri R. en la obra tantas veces citadas, pág 241, que “hay relación de causalidad cuando el hecho -o la omisión- doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido”. En este caso, el haber señalado en la demanda ejecutiva que el domicilio del deudor estaba ubicado en calle Aldunate 710 de la ciudad de Temuco, no puede ser causa directa y mucho menos necesaria del daño. En primer lugar, porque el deudor señor Contreras sí vive o al menos vivía en Aldunate 710 de Temuco, que corresponde al lugar en que está emplazado el edificio en que también viven las demandantes, pero en un departamento distinto. De este modo, no puede tenerse por causa directa y tampoco necesaria del daño un hecho que se ajusta a la realidad. En segundo lugar y siguiendo la teoría de la equivalencia de las condiciones, que resulta útil cuando identificamos una pluralidad de causas (domicilio incompleto, búsquedas positivas en un departamento distinto a aquel en que vive o vivía el deudor, notificación por el art. 44 en un lugar donde no vivía aquel), tenemos que sólo eliminando la actuación desplegada por el Receptor Judicial demandado, el resultado dañoso no se produce. En efecto, aún habiendo señalado el domicilio en la forma que se hizo en la demanda, el supuesto daño no se hubiese producido si el Ministro de Fe no hubiese estampado búsquedas positivas en un departamento que no correspondía al del deudor. Por otro lado, “el daño más grave” a que se refieren las actoras y que dice relación con que se haya conocido su condición sexual (al menos por la receptora y el funcionario policial), sólo puede producirse si la actora informa de la misma como en los hechos hizo. Dicho de otro modo, ni siquiera con las búsquedas positivas erróneas que hizo el receptor, hubiese sido posible que su condición sexual trascendiera, produciéndose así el daño al que se refiere, si la demandante señora Salas no hubiera mencionado que era homosexual. Tenemos entonces que no es posible reconocer como causa directa y necesaria del daño consistente en la vulneración de su intimidad sexual, el haber señalado el domicilio indicado y tampoco el haber estampados las búsquedas en la forma en que se hizo. Solo el propio accionar de la señora Salas deriva en el daño que ella hoy reclama.

3.1. PRUEBA DEL PERJUICIO – PRINCIPIO DE RESARCIMIENTO. En primer lugar debemos indicar que no le basta a la contraria con alegar la



Foja: 1

ocurrencia del perjuicio, sino que deberá probarlo, junto a cada uno de los fundamentos de la responsabilidad alegada. El daño no se presume. Del mismo modo se debe tener presente que en Chile impera el principio de la reparación del daño, es decir la indemnización solicitada y eventualmente concedida debe ser adecuada, justa, precisa. La indemnización de perjuicios tiene un fin exclusivamente resarcitorio, en cuanto busca reparar estrictamente el daño causado y no ir más allá de tal límite. El principio básico que encontramos en la doctrina, normativa pertinente y jurisprudencia relativa a la indemnización de perjuicios es que la indemnización no es fuente de lucro ni de ganancia. De lo contrario se transforma en un enriquecimiento ilícito, donde quien paga pasa a ser la víctima del mismo.

3.2. RESPECTO DE LAS PETICIONES POR DAÑO MORAL. Estimamos que la suma demandada en autos carece de la menor seriedad, puesto que se solicita una indemnización millonaria, que no dicen relación alguna con el supuesto daño sufrido, sino más bien con un evidente afán de ganancia. Por otro lado, se reclama la suma de \$20.000.000.- sin precisar en qué proporción debe ser indemnizada cada una de las actoras, como si fuese evidente que el sufrimiento supuestamente padecido es el mismo.

3.3.1. Valorización del daño. La facultad de determinación del quantum del daño moral se debe ejercer considerando los rangos que forman parte de nuestra jurisprudencia, como bien ha indicado el profesor don Carlos Peña, pues se trata de un elemento indicativo relevante, que permite el empleo de bases relativamente objetivas, sin perjuicio que ellas sean ponderadas por el sentenciador en función del caso concreto. Es propio de nuestra tradición jurisprudencial que los tribunales ejerzan esas facultades con medida y prudencia, pues sólo ello posibilita la medida de lo justo. “No es procedente otorgar una indemnización mayor de la que corresponde”. Tales montos pueden ser tenidos como referencia por US. y comparados con los montos demandados en estos autos. Al revisarlos concluiremos que no existe ninguna relación ni proporcionalidad en lo solicitado respecto a los estándares medios de nuestros últimos tiempos. El derecho, como ciencia social, responde a una realidad concreta. Las normas jurídicas establecen patrones de conducta y sanciones que tienen una estrecha relación con nociones sobre el hombre, la libertad, las obligaciones, la familia y otros valores socialmente relevantes. Asimismo los estándares económicos de las demandantes y del país como un todo, el costo de la vida, el valor relativo de las monedas en los distintos mercados, la calidad de vida, y en general factores socioeconómicos que conectan una actividad con otra a nivel nacional, son considerados en el sistema jurídico tanto en la etapa de creación como de aplicación de las dichas normas para distribuir adecuadamente los costos del sistema de responsabilidad. Desde esta perspectiva, la realidad de nuestro país constituye el entorno que determina la conducta de todos los que actúan y se desenvuelven en él. Creemos que en el ejercicio de una función judicial, el sentenciador no puede desprenderse de ese contexto.

4. SOBRE LA PETICIÓN DE REAJUSTES E INTERESES. La demanda de autos solicita que los montos de la eventual condena que se dicte en autos, sea ordenada pagar con reajustes e intereses, indicando que los mismos deben computarse desde el día en que se produjeron los supuestos daños (cuando se intenta trabar el embargo). Sobre el particular, cabe tener presente que las sentencias judiciales son títulos declarativos acerca de la existencia de una obligación, que se configuran como tales desde el momento en que quedan ejecutoriadas conforme el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. En



«RIT»

Foja: 1

consecuencia, declarada la existencia de una obligación por sentencia ejecutoriada, sólo desde ese momento nace para el acreedor el derecho a perseguir su pago conforme las sumas establecidas en la respectiva sentencia definitiva debidamente ejecutoriada. Para ello, deberá seguir el procedimiento legalmente establecido al efecto, los reajustes e intereses se devengarán sólo cuando el deudor se encuentre en mora de pagar la obligación dineraria establecida en la sentencia y una vez tramitados todos los recursos pertinentes.

5.- SOBRE LA CALIDAD DE RESPONSABLE SUBSIDIARIA DE MI REPRESENTADA: Ya se ha dicho que la demandante no invocó la responsabilidad solidaria que reconoce el artículo 2317 del C. Civil, sino que la subsidiaria, pues indudablemente no se daba la unidad del hecho ilícito en la que se funda el precepto que impone solidaridad a los coautores de un delito o cuasidelito civil (C. Sup. 27 de junio de 2018, rol N° 38145-2017). Pues bien, descartada la responsabilidad solidaria, pues la propia actora se abstiene de pedir que se condene a ella, no podemos sino entender que la responsabilidad que concurre es simplemente conjunta. Por otro lado, atendido que se ha invocado respecto de mi representada la calidad de responsable subsidiaria, no podrá condenarse a pago alguno en su contra, sin antes establecer, por un lado, la responsabilidad del demandado principal, señor Ulloa y agotarse a su respecto todos los intentos de cobro, por el otro. Sólo una vez que ella suceda y en el evento de que así sea, sólo en el evento más que improbable de que, además, se establezca algún grado de responsabilidad respecto de mi representada, podrá condenársele al pago de terminada suma, considerando que aquella es simplemente conjunta.

POR TANTO, RUEGO A VS. tener por contestada la demanda, rechazándola en todas sus partes con expresa condenación en costas o, en su defecto, y para el caso improbable de acogerla parcial o totalmente, rebajar los montos de condena prudencialmente de acuerdo a las diversas peticiones subsidiarias formuladas por esta parte, considerando además que, respecto de mi representada, la responsabilidad que se le ha imputado es SUBSIDIARIA.”.

SEXTO: Que con fecha 08 de febrero de 2019, don CLAUDIO NICOLAS ALARCÓN por el demandado Mauricio Ulloa Del Prado contestó la demanda solicitando su total rechazo con costas, conforme a los argumentos de hecho y derecho que expone, al siguiente tenor:

“I.- ANTECEDENTES. PRIMERO: Que, en lo que dice relación con mi representado, la demanda de marras se hace estribar en una supuesta responsabilidad extracontractual, de la cual derivarían millonarios perjuicios sufridos por las actoras, con ocasión del desempeño de las funciones de receptor judicial del señor ULLOA. SEGUNDO: Que, en primer término, negamos enfáticamente todos los hechos fundantes de la demanda, los que deberán ser acreditados por la actora en el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que no se cumplen los requisitos que exige la Ley para que se genere una obligación resarcitoria; y muy especialmente, no existe vínculo un hecho culpable o doloso del mi representado, que sirva de causa a los ingentes daños que persiguen las accionantes. Como se demostrará en la etapa procesal correspondiente, el señor ULLOA obró de buena fe y con la información proporcionada por los residentes del departamento 605 del edificio sito en calle Aldunate N°710, lo que impide absolutamente acoger la demanda. EN EFECTO: Es absolutamente falso que mi representado actuase con falta de la diligencia



Foja: 1

debida en sus actuaciones realizadas en la causa Rol C-5584-2017 del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, caratulada BANCO BILBAO con CONTRERAS. En este sentido, el día 12 de diciembre de 2017, el fedatario se constituyó en la dirección señalada en la demanda, con el objeto de notificar personalmente el libelo ejecutivo a don Richard Contreras Giha. Al llegar al lugar, pudo constatar que dicha dirección correspondía a un edificio denominado "Golden Plaza", el que cuenta con gran cantidad de departamentos destinados a la vivienda. En razón de lo anterior, mi representado realizó las consultas de rigor en la conserjería del edificio, con el sólo efecto de determinar si efectivamente el demandado vivía en aquel lugar. El conserje del edificio le refirió que, efectivamente, don Richard Contreras Giha habitaba el departamento 605. En base a dicha información, don MAURICIO ULLOA se dirigió al domicilio, siendo atendido por una persona adulta de sexo femenino quien le señaló que el referido departamento era efectivamente el domicilio del demandado, encontrándose éste en el lugar del juicio. La misma situación aconteció el día siguiente, 13 de diciembre. Producto de lo anterior, mi representado el día 21 de diciembre de 2017 procedió a practicar la notificación personal subsidiaria de la demanda, previa orden del Tribunal, en la forma estipulada en el art. 44 del Código de Enjuiciamiento Civil, constando en su estampado que hizo entrega de copia íntegra de la demanda de autos a "persona adulta de sexo masculino de su mismo domicilio quien no dio su nombre y se excusó de firmar por estimarlo innecesario.". Finalmente, habiéndose dejado cédula de espera al demandado para que concurriese al oficio del señor ULLOA el día 22 de diciembre, éste procedió a requerirlo de pago en su rebeldía, para posteriormente, ese mismo día, proceder a efectuar su última diligencia en la referida causa, cual fue constituirse en el inmueble con el fin de trabar el embargo, gestión que finalmente no pudo llevar a efecto, debido a que persona adulta de sexo masculino se opuso a ello. Hago presente a S.S. que, tal como ordena el art. 61 del Código de Procedimiento Civil, en relación con en el art. 44 del mismo cuerpo legal, mi representado sólo puede dar TESTIMONIO FIDEDIGNO del lugar, día, mes y año donde se realizó la gestión y las formalidades con las cuales se procedió. Sobre el particular, ambas certificaciones de búsquedas positivas se realizaron por los dichos de una persona del sexo femenino que le habría señalado que ese era efectivamente el domicilio del señor Contreras. En consecuencia, en su atestado se dio fe de lo expuesto por un tercero, sin ser poder el receptor actuante verificar la veracidad de la información recibida. Por lo expuesto, la demanda deberá ser desestimada. TERCERO: Que, del confuso relato las demandantes, se desprenden una serie de imputaciones antojadizas e inconexas respecto del actuar del señor ULLOA, del que derivaría la supuesta responsabilidad extracontractual que alegan. Así las cosas, los antecedentes fácticos en que apoya su libelo son inexactos y forzados, urdiendo así una demanda claramente tendenciosa en contra de mi representado. En efecto, las demandadas fundan su pretensión en tres hechos básicos, de los que emanarían todos sus males, debido a una supuesta responsabilidad de mi representado, siendo estos: (i) El verse expuestas al hecho de un embargo con fuerza pública, mientras se encontraban almorzando en su domicilio, situación que les causó "tal grado de aflicción y estrés" que, además, las hizo perder 3 días de trabajo; (ii) La descompensación que sufrió el padre de Cecilia Salas, don Fredy Salas, quien se vio sometido al trato poco deferente de la receptora (no del señor ULLOA) y del funcionario de Carabineros de Chile; y (iii) La exposición pública a la



Foja: 1

que se vieron expuestas las demandantes, respecto a su orientación sexual. Que, tal como se expondrá en los apartados siguientes, dichos hechos no son en lo absoluto imputables a mi representado, ni menos las consecuencias directas derivadas de los mismos. II.- EXCEPCIONES Y DEFENSAS. CUARTO: Que, pese a lo pretendido por las actoras, la descompensación que sufrió don FREDY SALAS constituye un hecho cuyas consecuencias directas han sido soportadas por una persona distinta de las demandantes, situación por la que opongo expresamente la excepción de falta de legitimación activa para pretender accionar por daños sufridos por un tercero, sin contar con poder o mandato que las habilite para ello. QUINTO: Que, asimismo, no concurren los presupuestos consagrados en la ley para que se genere responsabilidad extracontractual y, por tal motivo, las actoras deberán acreditar todos y cada uno de los requisitos copulativos que ésta exige. Menester es destacar que los requisitos fundamentales para la existencia de dicha la responsabilidad civil no se configura en la especie, por lo que corresponde rechazar la demanda de indemnización, según se demostrará en los capítulos siguientes: a).- Acción u omisión del demandado. Las demandantes deberán probar que el demandado ha realizado una acción u omisión, dolosa o culposa, de la cual derive un daño indemnizable. Como ya se ha dicho, los daños que las propias demandantes reclaman no fueron, ninguno de ellos, causados por actos realizados por mi representado. Tal es su confusión, que las mismas demandantes señalan que los supuestos hechos fueron realizados por unas personas distintas al receptor MAURICIO ULLOA, a quienes no demandan. En efecto, según el propio relato de las demandantes, los tres hechos generadores de supuesta responsabilidad, fueron todos directamente realizado por terceros ajenos a mi representado, siendo estos ejecutados por la receptora judicial doña Rosa Olivares Cerda y un funcionario de Carabineros de Chile, a quien ni siquiera identifican. Respecto del estrés que dicen haber sufrido las actoras, los comentarios del tenor “que no entendía que estuvieran dos mujeres si ella hablaba de su pareja”, son derechamente imputados por las mismas demandantes a la receptora doña Rosa Olivares Cerda, por lo que claramente no pueden ser atribuidos a mi representado. Misma situación ocurre con la exposición pública de la orientación sexual de las demandantes con ocasión del embargo, toda vez que el señor ULLOA ninguna participación tuvo que ver en el embargo con fuerza pública. Idéntica situación ocurre con la descompensación que sufrió don Fredy Salas, por cuanto, según el propio relato de libelo pretensor, esta se produjo por serle requerido un control de identidad por parte de un funcionario de Carabineros de Chile. Nuevamente, queda claro que mi representado no tuvo participación en el referido procedimiento policial. En conclusión, toda responsabilidad que emana de los supuestos comentarios impertinentes de la ministro de fe señora Olivares, de la realización del embargo con fuerza pública y del “control de identidad” al que fue sometido el señor Salas (quien no demanda) y su consecuencial descompensación, deben de ser reparadas -en el evento de estimarse que fueran dañosas-, por quienes las realizaron o practicaron, pues, como ya se ha dicho, no fue don MAURICIO ULLOA quien, simplemente cumplió cabalmente con sus deberes en su calidad de Receptor Judicial y no estuvo presente ni participó de forma alguna en los hechos generadores de los supuesta responsabilidad extracontractual que reclaman. b).- Relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios. Como bien sabe SS. los perjuicios susceptibles de indemnizarse son los que provienen directa e inmediatamente del hecho que los causa. Como



Foja: 1

acertadamente enseña el Jurista MESSINEO, debe existir un nexo o relación INMEDIATA, de causa a efecto, entre el acto o hecho del hombre (ya sea acción u omisión) y el evento o daño. En el caso de autos, las demandantes alegan que existió una relación de causalidad entre el daño sufrido y el despliegue de la labor receptorial de mi representado que concluyó el día 22 de diciembre de 2017; empero, su libelo pretensor ubica inequívocamente el origen del daño en la diligencia de embargo con fuerza pública, actuación ajena al obrar de don MAURICIO ULLOA. En efecto, en la página 3 del libelo demanda, las actoras expresaron que: “El último estampe receptorial (letra e)), siendo sucinto al señalar “no cumplí por haberse opuesto una persona adulta del mismo domicilio”, es el que motiva la presente acción, procediendo esta parte a narrar como es que se acaecen los hechos que generaron en mi representada un estrés y desasosiego que perdura hasta el día de hoy.”. SEÑOR JUEZ LETRADO: Las propias demandantes han señalado que la única causante de sus pesares, “estrés” y “desasosiego”, lo es la actuación de la receptora judicial doña Rosa Olivares Cerda, a quien decidieron –por razones que se desconocen- no demandar, siendo por tanto inconcuso que estos malestares no tienen por causa directa y necesaria la actuación del señor MAURICIO ULLOA. En cuanto a que la responsabilidad extracontractual alegada tendría por causa la exposición pública de la orientación sexual a la que se vieron expuestas las actoras con ocasión del embargo con fuerza pública, reiteramos que, habiendo sido la receptora judicial doña Rosa Olivares Cerda quien expuso dicha condición de homosexualidad -que hasta ese momento sólo se mantenía en la esfera íntima de su familia- mal podría ser imputado a una actuación procesal de mi representado; más cuanto y qué dicha exhibición es indiferente en esta clase de diligencias. Por último, la causa eficiente de la descompensación que sufrió don Fredy Salas fue el control de identidad practicado por un funcionario de Carabineros de Chile, por lo que mal podría atribuirse a la acción u omisión de mi representado. En cualquier caso, el control de identidad es una herramienta efectiva, legítima y completamente apegada a la Ley, que esta última le entrega a las policías para efectos que, en los casos fundados y según las circunstancias, estimaren que exista algún indicio de la tentativa o comisión de un crimen, simple delito o falta por parte de algún individuo u ocultación de identidad; estando su actuación premunida de confianza legítima, atendida la misión que le entrega a Carabineros la Carta Fundamental y su Ley Orgánica Constitucional. Sin perjuicio de lo anterior y a todo evento, esta no es la instancia para cuestionar la procedencia o forma de realización del referido procedimiento policial, toda vez que dicho asunto es de competencia exclusiva de los Tribunales Penales, según el tenor del art. 85 del Código Procesal Penal. COLOFÓN: De la enmarañada relación de los hechos expuesta por las demandantes, no puede inferirse mínimamente cómo el actuar de mi representado pudo haber sido causa DIRECTA e INMEDIATA de los hechos basales que sirven de sustento los millonarios perjuicios reclamados de contrario. c).- Imputabilidad del deudor (dolo o culpa). Como bien sabe SS., para que un perjuicio sea indemnizable es necesario que este provenga de un acto doloso o culposo de quien sería su generador. Don MAURICIO ULLOA actuó en todo momento en cumplimiento de su ministerio, con la diligencia debida, de buena fe y con las informaciones de que disponía, suministradas por el conserje del edificio y la ocupante del inmueble donde estampó búsquedas. Lo anterior, pues un receptor judicial sólo puede otorgar testimonio fidedigno del lugar, día, mes y año donde se



«RIT»

Foja: 1

realizó la gestión y las formalidades con las cuales se procedió, jamás de los dichos de terceros que constan en su estampado, de tal manera que no puede hacerse cargo del hecho que una persona del sexo femenino le señalase que ese era el domicilio del demandado. Por lo anterior y habiendo cumplido mi representado en todo momento con las obligaciones legales establecidas en el art. 393 del Código Orgánico de Tribunales y art. 61 del Código de Procedimiento Civil, no es posible atribuirle responsabilidad extracontractual por sus actuaciones. SEXTO: Que, uno de los principios generales que informan nuestro derecho sustantivo civil es aquel que impide a las partes aprovecharse de su propia negligencia. Tal principio tiene su fuente en la locución latina *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, cuyo fin es establecer una prohibición general de abusar del derecho propio a fin de obtener ventajas indebidas. Sobre el particular, hacemos presente a US. que las demandantes tuvieron conocimiento del proceso que ellas tildan de errado desde -al menos- el día 21 de diciembre de 2017, fecha en la cual recibieron una cédula fijada en su domicilio, según consta en el estampado correspondiente. Al menos desde esa data, las demandantes contaban con los remedios procesales que la ley les franqueaba para impedir cualquier molestia o turbación en su domicilio o vida privada, pudiendo haber puesto en conocimiento al Tribunal o a mi representado de fe dicha situación. Sin embargo, y tal como se desprende de su relato, las actoras optaron por una actitud pasiva, no realizando gestión judicial alguna sino hasta ya consumados los hechos. En consecuencia, las demandantes, en conocimiento de la acción y del peligro del embargo, no realizaron gestión alguna, judicial o extrajudicial, durante el periodo transcurrido entre la notificación personal subsidiaria y el embargo fallido, cual es el hecho basal de la acción impetrada. SÉPTIMO: Que, atendido lo expuesto, debe considerarse improcedente la acción impetrada, toda vez que los presupuestos perjudiciales en los que ésta se funda han sido causa directa de la inacción de las mismas demandantes. Luego, las actoras estarían impedidas de solicitar la indemnización de perjuicios, invocando hechos fruto de su propia inconducta.

POR TANTO; SÍRVASE S.S., tener por contestada la demanda, rechazándola en todas sus partes, con expresa condena en costas.”.

SÉPTIMO: Con fecha 18 de febrero de 2019, don FRANCISCO PINEDA PEÑA por el demandante evacuó en trámite de la réplica, al siguiente tenor:

“I. En cuanto al demandado autodenominado “el Banco” 1. Que, en síntesis, luego de una extensa exposición tanto fáctica como de derecho, puede concluirse que estiman no tener una responsabilidad directa en los hechos en que se funda el libelo: a) En primer lugar por haber obrado de buena fe dada la presunción de veracidad de lo que gozan los instrumentos otorgados por ministros de fe (receptor en el caso de marras), presunción que precisamente tiene por finalidad el permitir llevar adelante ciertas diligencias sin que aquel que las encomienda se vea en la obligación de constatar y contrastar con la realidad, resultando, por ende, el operar con la debida diligencia en un acto de la sola responsabilidad de quien lo ejecuta dada la condición de la que está investido, siendo, en concepto de la demandada el Banco de corte absoluto del receptor Sr. Ulloa. b) En segundo lugar, por la falta de determinación de órgano alguno al que atribuir cualquier tipo de responsabilidad; órgano como parte de la persona jurídica, con preponderancia tal que sea capaz de representar la voluntad de aquélla. Sostiene la demandada que,





Foja: 1

al no señalar un órgano con sus consecuentes atribuciones y limitaciones, no existe manera de imputar ningún tipo de responsabilidad a la persona jurídica consistente en la Sociedad Anónima abierta de giro bancario, principalmente por faltar quien ejecute el ilícito que se reclama. c) Por último, y a fin de evitar la reproducción de la extensa presentación de la contraria, sumado a lo recién expuesto, señalan no tener responsabilidad alguna, que no existe legitimidad ni activa ni pasiva, la falta de requisitos para reclamar en la manera que se pretende, entre otras exposiciones tendientes a la liberación de toda culpa y que, como corolario, si alguna clase de responsabilidad existiera y les fuere imputable, la misma sólo tendría el carácter de simplemente conjunta y que, en todo caso, deberá establecerse primeramente en la persona del Sr. Ulloa, dado el carácter subsidiario en que se demanda a una y otro. 2. Que, bien pudiera sostenerse que los hechos que se reclaman son de exclusiva responsabilidad del actuar del Sr. Ulloa. Lo correcto, no obstante, es señalar que su responsabilidad es directa, e indirecta la del Banco. Precaviendo una eventual contraargumentación en este sentido, es necesario destacar que la responsabilidad civil extracontractual no limita el resarcimiento sólo a los perjuicios que se previeron o pudieron prever, como sí ocurre en materia contractual y deja de manifiesto el artículo 1558 del Código Civil, sin perjuicio de la existencia de dolo en donde aquéllos se amplían a los perjuicios consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o haberse demorado su cumplimiento. Ahora bien, lo que se reprocha es mantener el estado de cosas incluso con conocimiento de ser errado el domicilio en el cual se intentaba compulsivamente llevar a cabo la acción ejecutiva. Porque a pesar de sorprenderse y no encontrar explicación la demandada, de no “tratar de arreglar el asunto pese al tiempo transcurrido”, lo cierto es que la instancia judicial era la última que mis representadas tenían en mente, dado el costo y tiempo asociados sumado a que, plausiblemente, creían poder arreglar sin intervención de tribunal alguno. Tal y como se señala en la demanda, pasado convenientemente por alto por el demandado, mis representadas concurren a la Sociedad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sede Temuco – hago presente que al momento de incoar la acción no tenía este abogado conocimiento de la fusión por incorporación al actual Banco Scotiabank Chile, lo cual fue subsanado, constando en los autos dicha circunstancia -. En sus oficinas no dieron solución al problema, bastando un simple llamado y posterior verificación de los domicilios. Por otra parte, los Bancos no son cualquier persona jurídica, siendo sometidos a regulación especial como sociedad anónima abierta y bajo la observancia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y la razón es lógica, pues su giro no pueden entregarse a cualquiera. Más allá de la discusión del deber de custodia que por antonomasia se les encomienda, dado que aquí no se discute sustracción o pérdida de dinero, no es menos cierto que el poder que tiene un Banco es difícilmente extrapolable a una persona natural común y corriente, quien, de base, barajará el concurrir a la justicia dado que no siempre se cuentan con los medios para una efectiva defensa o asesoría letrada; un Banco no tendrá estos cuestionamientos y llevarán a cabo, como en el caso en cuestión, la acción ejecutiva hasta su entero desenlace. Tal capacidad, que todo acreedor quisiera, trae aparejada a lo menos una diligencia media: verificar domicilios, estando en conocimiento de que éstos se encuentran en entredicho es derechamente lo mínimo, pues no es baladí el encomendar la gestión de embargo, resultando en un evidente perjuicio accionar de esta manera, pudiendo



Foja: 1

cuestionarse la mayor o menor gravedad si prospera. Ciertamente a mis representadas no se les retiró especie alguna, pero ello es por su propia reticencia a la diligencia y no por intervención preventiva del demandado. Para una persona que no tiene los conocimientos técnicos que permitan comprender el alcance de un embargo, la sola palabra le causará gran estrés, más cuando se concurre a su domicilio con receptor y Carabineros en uso de la fuerza pública. ¿Quién permanecería indiferente ante tal situación? Pero es más, porque el examen, un examen básico de comparación entre un domicilio y otro, lo hicieron mis propias representadas, quienes se percataron que la deuda era de un vecino de ellas. Si ellas, sin conocimiento técnico/jurídico alguno fueron capaces de tal análisis, ¿qué grado de culpa queda a quien encomienda la gestión? Esto es algo que sólo VS., podrá determinar. 3. Que, en cuanto al hecho de haber obrado de buena fe, llama la atención lo reiterativo de la contraria en el despliegue de su conducta cuando es lo esperado, lo mínimo, siendo un principio fundamental y transversal en materia civil. En términos prácticos, entiende esta parte perfectamente lo dicho en el sentido de que no tenían motivos para desconfiar de los estampes dejados por el Sr. Ulloa que luego servirían para la gestión de embargo a cargo de la Sra. Olivares. Es más, nos hicimos cargo de dicho punto en el libelo por lo que doy por reproducido lo expuesto en esa oportunidad. No obstante, también sabe este abogado que la comunicación con los receptores no es aislada y se da de manera personal, siendo quien encomienda la diligencia el primero en enterarse de algún entorpecimiento o traba que pudiera presentarse. Bajo la lógica del Banco, de haber obrado de buena fe eximiéndose de todo tipo de culpa, y ante la falta de reclamo de mis representadas y la presentación efectuada alegando la nulidad de lo obrado como tercero excluyente, ¿qué habría ocurrido? Se habría seguido adelante, retirándose las especies pertinentes y realizándolas en pública subasta, repitiéndose la actual presentación con un grado de perjuicios aun mayor, pudiendo valerse del mismo argumento: obrar de buena fe. Y sin embargo se generaría el absurdo de que, en el hipotético evento descrito, parecería indiscutible su responsabilidad. Por otro lado, y en la misma línea argumentativa, cabe tener presente que la responsabilidad civil extracontractual, si bien es objetiva en el sentido de que debe existir daño, no es menos cierto que el daño puede generarse tanto por acción como por omisión; en el caso, la omisión, un dejar de hacer, refiriéndonos a la corroboración de que la acción dirigida lo hacía precisamente contra correspondía, es un hecho suficiente como generador de responsabilidad con ocasión de daño, haya habido dolo o culpa de por medio, exigencia que sí debe estar presente. 4. En cuanto a la carencia que pretende hacer ver la contraria en torno a la falta de señalamiento de un órgano al que atribuir el acto – u omisión como sostiene esta parte –, debemos entender al Banco como un todo, pues una interpretación contraria conllevaría la dificultad, por no decir imposibilidad, de demandar bajo cualquier supuesto. ¿A quién deberíamos haber atribuido la responsabilidad? ¿Al departamento jurídico? ¿Al abogado mismo que encomienda la gestión? ¿Al gerente? Y luego vendría una segunda dificultad: determinar las atribuciones y limitaciones del respectivo órgano. Si tal traba estuviese presente y fuera verdaderamente exigible, no existiría una posibilidad real de demandar prácticamente a ninguna persona ficticia en los términos del artículo 545 del Código Civil. 5. En cuanto a la falta de legitimación. Primeramente en cuanto a la legitimación activa, es preciso destacar que el daño en cuanto a víctima no está determinada sólo por quien lo sufre. La víctima no



Foja: 1

siempre estará en condiciones de reclamar algún tipo de responsabilidad: bien pudiese quedar incapacitada permanentemente o incluso ser privada de su vida, y no obstante, quien genere el hecho dañoso, doloso o culposo, quedaría impune lo cual es contrario al principio más básico de equidad. Este punto no es tan claro en materia civil pero no admite dudas en materia penal, extrapolable al caso en cuestión. Así, el artículo 108 del Código Procesal Penal, al referirse al concepto de víctima cuando ésta faltare por causa de muerte o no pudiera ejercer los derechos que le corresponden, dispone que se considerarán como tales las siguientes personas: “a) Al cónyuge y a los hijos; b) a los ascendientes; c) al conviviente; d) a los hermanos, y e) al adoptado o adoptante,” Aclaro que se considera al conviviente, y no al conviviente civil, concepto por ende bastante más amplio que abarca a quien vive con otra persona en relación de pareja sin haber mediado entre ellos acuerdo de unión civil. En cuanto a la legitimidad pasiva, ya nos hicimos cargo del cuestionamiento en el punto 4., por lo que no se agregarán argumentos al respecto, a fin de evitar extender fútilmente esta presentación. 6. En cuanto a la responsabilidad por hechos de terceros, será materia que sólo podrá determinarse con la pertinente prueba que se aporte, no pudiendo operar como eximente ni así tampoco la supuesta responsabilidad de mis representadas que dejaron pasar cuatro meses, como pretende hacer ver la contraria a VS., hecho absolutamente falaz, según se acreditará. Además, estando dentro del plazo para impetrar la acción, como dispone el artículo 2332 del Código Civil, en nada guarda relación el transcurso de cuatro meses, siendo legítimo todo reclamo ejercido en tiempo y forma. 7. Por último, la responsabilidad que cabe a la entidad bancaria es aquella que doctrinariamente es llamada “concurrente”, tal y como se expresa en la parte referida al derecho del libelo, y que si algún grado de confusión existe a razón del acápite intitulado “d) De la responsabilidad subsidiaria de la entidad bancaria BBVA” debe entenderse de manera enunciativa pero no determinante, pues los hechos se enmarcan en la responsabilidad civil extracontractual, la cual siempre es solidaria en lo relativo a los sujetos que ocasionan el daño que se reclama; así queda de manifiesto en los artículos 1511 y 2317 del Código Civil, salva las excepciones señaladas en este último y que no se dan en el caso. II. En cuanto al demandado Mauricio Ulloa del Prado 1. Que, en lo que respecta a la falta de legitimación activa de parte mis representadas, según entiende la contraria, en exposición bastante semejante al demandado autodenominado “el banco”, me remito a lo referenciado en el punto 5., del acápite de esta presentación intitulado “I. En cuanto al demandado autodenominado “el Banco”, con la sola acotación de que cada uno de los afectados es libre de accionar o no, lo que en nada limita el daño causado. Hago presente que quien sufre la descompensación es el padre de una de mis representadas; el que no haya optado don FREDY SALAS por demandar no quita el dolor causado a mi representada quien vio en una situación de riesgo a su padre, con el cual mantiene constante comunicación y le guarda sumo cariño. Difícilmente una persona podría permanecer indiferente ante cualquier tipo de daño ocasionado a sus progenitores, salvo una menoscabada relación familiar, inexistente en el caso de marras, por lo que es perfectamente plausible reclamar daño moral mediante la acción incoada en los autos. Tanto más puede decirse de mis representadas, quienes el día de la diligencia del embargo se encontraban tranquilamente en su hogar y tuvieron que vivir toda la amalgama de eventos aparejados, ya especificados en el libelo. En este sentido el grado de estrés y tolerancia frente a



«RIT»

Foja: 1

un mismo evento varía de persona a persona, por lo que el daño, en sólo este sentido, es reclamable por la vía precisamente del daño moral: precio del dolor, derivado de un episodio angustioso, materia, por cierto que será pertinentemente probada cuando corresponda. 2. En cuanto a la falta de requisitos para la concurrencia de la responsabilidad civil extracontractual, nuevamente en una exposición similar a la de la demandada “el banco”, me remito expresamente a la relación circunstanciada que en la demanda se efectúa, agregando que es de competencia del Juez civil determinar el concurso y establecimiento de éstos según la prueba aportada y los hechos fehacientemente acreditados, resultando en meras declaraciones lo expuesto por la contraria.

POR TANTO, en razón de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 311 y 312 del del Código de Procedimiento Civil, A US RUEGO., tener por evacuado la réplica conferida a esta parte, dando traslado para dúplica a la demandada.”.

OCTAVO: Con fecha 25 de febrero de 2019, don PATRICIO MACKENNA CORTÉS por el demandando Scotiabank Chile S.A. evacuó en trámite de la dúplica, al siguiente tenor:

“En su presentación, la actora, alterando substancialmente lo pedido en su demanda, cuestión que, encontrándose trabada la Litis, no resulta admisible, en lugar de atribuir al Banco una responsabilidad de carácter “subsidiario” según se lee en la demanda, ahora se permite atribuir a mi representada una responsabilidad que viene en denominar “indirecta”, reconociendo que la responsabilidad directa sólo sería atribuible al demandado señor Ulloa. Infringe así lo previsto en el artículo 312 del CPC. Lo anterior no obedece a una confusión sin importancia de la actora, sino que a su convencimiento en orden a no existir un vínculo directo (nexo causal) entre la omisión de que se acusa a mi representada -no haber confirmado el domicilio del deudor- y los efectos de dicha conducta. La contraria sabe – y por eso relega la responsabilidad de mi representada a un segundo plano-, que a Banco Scotiabank no le era exigible una conducta distinta a la desplegada. En efecto, encontrándose revestida la actuación del Ministro de Fé de la presunción de veracidad que le reconoce el art 427 inciso 1º del CPC., no le quedaba sino asumir, tal como hizo el Tribunal a cargo de la ejecución al ordenar la notificación según el art. 44 del CPC, que efectivamente el deudor que debía ser notificado tenía domicilio en el lugar que el receptor informó en la causa judicial respectiva, esto es, los autos ejecutivos Rol N° 5584-2017 seguidos ante el 1º Juzgado Civil de esta ciudad. - En cuanto a la relación de causalidad: Como Us. bien sabe, la relación de causalidad consiste en que el daño sea la consecuencia directa y necesaria de la acción u omisión culpables o dolosas. El art 2314 del C. Civil habla de “inferir” y el 2329 de “imputar”. Como dice Mezger en su Tratado de Derecho Penal, “la punibilidad del resultado presupone que éste se encuentra en relación de causalidad con el acto de voluntad del que actúa. El acto de voluntad es causal respecto al resultado cuando suprimido “in mente” desaparecería también el resultado en su forma concreta”. En el caso que nos ocupa, mi representada informó en la demanda que el domicilio del deudor correspondía al que éste informó al solicitar el crédito, esto es, “Aldunate 710, Temuco”. Consignado ese antecedente en la demanda propiamente tal, el Receptor Judicial señor Ulloa, en cumplimiento del mandato legal conferido en cuanto Ministro de Fé, confirmó lo aseverado por esta parte y, efectuadas las búsquedas de rigor, informó que en el edificio respectivo cuya dirección correspondía a la señalada en



Foja: 1

la demanda, el departamento N° 605 era el que correspondía al deudor demandado. Recién cuatro meses después de haberse estampado las búsquedas y notificarse la demanda en un departamento que -tal como se supo posteriormente-, no era el del deudor, con fecha 18 de abril de este año, previa autorización del Tribunal, se concurrió esta vez por la receptora judicial doña Rosa Olivares Cerda al domicilio tantas veces señalado, a fin de trabar embargo con el auxilio de un funcionario de Carabineros, no habiéndose llevado a cabo la diligencia luego de oídas las explicaciones dadas por doña Cecilia Salas Urrutia a la Ministro de Fe señalada. La contraria indentifica el vínculo de causalidad entre hecho culpable y resultado dañoso, en el juicio ejecutivo referido más arriba, seguido en contra del deudor Richard Contreras Giha. Según la actora, el hecho negligente de consignar un domicilio errado “decanta en la traba de embargo respecto de los bienes de mi representada, lo que ocasiona los daños recién expresados”. Ya se ha dicho que el domicilio señalado en la demanda NO ERA EL DE LAS ACTORAS. Fue el receptor demandado quien, en el ejercicio de sus funciones, informó que el departamento del deudor era el N° 605, cuestión que, según se supo al concurrirse a la diligencia de embargo, no era efectivo. Tenemos de este modo que no podemos encontrar en el señalamiento del domicilio que se indica en la demanda ejecutiva, el origen de los perjuicios. Sobre todo si efectivamente corresponde al edificio donde tiene o tenía su domicilio el deudor. En segundo lugar, EL EMBARGO NUNCA SE TRABÓ. De ese este modo no puede reconocerse en el embargo el hecho que ocasionó los daños que se mencionan. Señala don Arturo Alessandri R. en la obra tantas veces citadas, pág 241, que “hay relación de causalidad cuando el hecho -o la omisión- doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido”. En este caso, el haber señalado en la demanda ejecutiva que el domicilio del deudor estaba ubicado en calle Aldunate 710 de la ciudad de Temuco, no puede ser causa directa y mucho menos necesaria del daño, pues el departamento del deudor estaba efectivamente en el edificio ubicado en esa dirección. En efecto, el deudor señor Contreras sí vive o al menos vivía en Aldunate 710 de Temuco, que corresponde al lugar en que está emplazado el edificio en que también viven las demandantes, pero en un departamento distinto. De este modo, no puede tenerse por causa directa y tampoco necesaria del daño un hecho que se ajusta a la realidad. Asimismo y siguiendo la teoría de la equivalencia de la condiciones, que resulta útil cuando identificamos una pluralidad de causas (domicilio incompleto, búsquedas positivas en un departamento distinto a aquel en que vive o vivía el deudor, notificación por el art. 44 en un lugar donde no vivía aquel), tenemos que sólo eliminando la actuación desplegada por el receptor judicial demandado, el resultado dañoso no se produce. En efecto, aún habiendo señalado el domicilio en la forma que se hizo en la demanda, el supuesto daño no se hubiese producido si el Ministro de Fe no hubiese estampado búsquedas positivas en un departamento que no correspondía al del deudor. Por otro lado, “el daño más grave” a que se refieren las actoras y que dice relación con que se haya conocido su condición sexual (al menos por la receptora y el funcionario policial), sólo puede producirse si la actora informa de la misma como en los hechos hizo. Dicho de otro modo, ni siquiera con las búsquedas positivas erróneas que hizo el receptor, hubiese sido posible que su condición sexual trascendiera, produciéndose así el daño al que se refiere la demanda, si la demandante señora salas no hubiera mencionado que era



Foja: 1

homosexual. Tenemos entonces que no es posible reconocer como causa directa y necesaria del daño consistente en la vulneración de su intimidad sexual, el haber señalado el domicilio indicado y tampoco el haber estampados las búsquedas en la forma en que se hizo. Solo el propio accionar de la señora Salas deriva en el daño que ella hoy reclama. - No concurrencia de la responsabilidad solidaria: La contraria, al evacuar el trámite de la dúplica, confirma que los demandados participan de hechos distintos que no pueden resultar vinculados. Así, a mi representada se le acusa de no confirmar la efectividad de ser el domicilio señalado en la demanda el del deudor, en circunstancias que sí lo era (el edificio ubicado en Aldunate 710 corresponde al inmueble en que habitaba el demandado en los autos ejecutivos). Al Receptor demandado se le acusa de haber señalado que el departamento 605 correspondía al de las demandantes de autos, en circunstancias que ello no era efectivo. Lo anterior explica que la demandante no haya invocado en su demanda la responsabilidad solidaria que reconoce el artículo 2317 del C. Civil, pues indudablemente NO se daba la unidad del hecho ilícito en la que se funda el precepto que impone solidaridad a los coautores de un delito o cuasidelito civil (C. Sup. 27 de junio de 2018, rol N° 38145-2017). Hoy, en su escrito de dúplica, cambia de opinión y pretende modificar su demanda, contraviniendo lo previsto en el artículo 312 del CPC. Ya se ha dicho al contestar la demanda, que mi representada no indicó un domicilio erróneo, sino que, basado en la información proporcionada por el propio deudor, consignó en la demanda el domicilio que este señaló, mismo que si bien correspondía al edificio en el que habitaba, no precisaba el número de departamento, cuestión esta última que, bajo ningún aspecto, puede tenerse como causa directa y necesaria del supuesto daño. El Ministro de Fe demandado, en cumplimiento del mandato legal respectivo, luego de efectuar las búsquedas que prevé la ley, logra establecer que el departamento que servía de domicilio del deudor era el N° 605 del edificio ubicado en Aldunate 710 de Temuco. De ello informó al Tribunal y éste, tal como lo dispone el art 44 del CPC ordena notificar la demanda por cédula en el lugar señalado por el Receptor demandado. Siguiendo el razonamiento de la actora ¿tenemos que entender entonces que el Tribunal que ordena notificar en el lugar que el Receptor informa como el domicilio del deudor, también es responsable de lo sucedido por no haber puesto en duda la información que la ley dispone que debe presumirse como verdadera? - En cuanto a la falta de la legitimación activa para demandar como víctima del daño. La demandante, intentando explicar lo inexplicable, afirma que “el daño en cuanto a víctima no está determinada sólo por quien lo sufre”. Agrega que “la víctima no siempre estará en condiciones de reclamar algún tipo de responsabilidad”. La actora cita al efecto algunos ejemplos y una disposición del C. Procesal Penal. Lo cierto S.S. es que en el caso de autos, la supuesta víctima que no ha comparecido a suscribir la demanda, específicamente el padre de una de las demandantes, no está incapacitada y no se ha invocado y muchos menos acreditado algún tipo de impedimento para accionar. Resulta evidente que la actora no está legitimada activamente para demandar por el supuesto daño padecido por quien pudo perfectamente haber accionado en estos autos y no lo hizo. En lo que se refiere a la también demandante doña Claudia Besnier Calderón, jamás se refiere a ella la Ministro de Fe que concurrió a trabar el embargo que, en definitiva, no se materializó. No se vislumbra entonces cómo pudiera haber resultado dañada y, por ende, legitimada activamente para demandar en autos. La peregrina tesis de la contraria en lo que



Foja: 1

se refiere a que terceros pueden reclamar el daño moral sufrido por otros, sólo resulta atendible cuando los directamente afectados se han visto impedidos de accionar, situación que no se ha producido en la especie porque, hasta donde sabemos, no se trata de personas incapacitadas y mucho menos fallecidas. De este modo y radicando la propia demandante el origen del daño en la diligencia llevada a cabo por la señora Olivares (que no se materializa), no se entiende cómo esa gestión pudo haber afectado a la señora Besnier que no estaba presente, legitimándola para demandar como en la especie lo ha hecho. - En relación a la falta de legitimación pasiva: La contraria, desconociendo lo evidente, insiste en que es posible accionar en contra de una persona jurídica sin identificar al órgano que habría cometido el delito civil de que se acusa al Banco. A este respecto, reitero lo señalado por don Arturo Alessandri R. quien afirma que “Las personas jurídicas son personal y directamente responsables de un delito o cuasidelito, sea de acción u omisión, cuando éste se ha sido cometido por sus órganos, esto es, por las personas naturales o por los consejos en quienes reside la voluntad de la persona jurídica, según la ley o los estatutos” (el subrayado es nuestro) (Arturo Alessandri R., Teoría de la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Tomo 1, p. 153.). Continúa señalando este autor que “el órgano es la encarnación de la persona jurídica: los actos del órgano son, por lo tanto, actos de la persona jurídica misma”. Agrega luego que “para que así ocurra, es menester que el órgano obre en ejercicio de sus funciones, es decir, dentro de las facultades que le competen o en virtud del acuerdos celebrados con conformidad a los estatutos o a la ley; sólo entonces encarna la voluntad de la persona jurídica (art 552 C.C.). De lo contrario, ésta no contrae responsabilidad”. Como S.S. puede ver, para los efectos de determinar la responsabilidad de una persona jurídica, es esencial identificar al órgano ejecutor material del hecho ilícito (según Alessandri las personas naturales o consejos en quienes reside la voluntad de la persona jurídica). Al no haber señalado la contraria cuál habría sido la persona (órgano) que incurrió en la acción u omisión ilícita que identifica como la causante del daño, no es posible determinar si obró dentro de las facultades que le competían. Mucho menos se puede establecer si gozaba de la capacidad necesaria para actuar. A este respecto, el mismo Alessandri concluye que se derivan dos consecuencias importantes. La primera, “que si el órgano es incapaz de delito o cuasidelito según el artículo 2319, la persona jurídica también lo es...” La segunda, “que la víctima debe probar la culpa o el dolo del órgano o, mejor dicho, de la persona jurídica, de acuerdo con las reglas generales...El art. 2320 es inaplicable, se refiere a la responsabilidad por el hecho ajeno de un dependiente, y el órgano no lo es”. (El subrayado y el destacado en negrilla es del suscrito). Tenemos en consecuencia que la contraria debió haber identificado al órgano que obró por la persona jurídica, pues sólo así es posible establecer si se trata de un órgano capaz, por un lado, y de un órgano que actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, por el otro. Por último S.S., tenemos que, de lo que afirma la propia actora en su escrito de réplica, no es posible encontrar el elemento subjetivo de la culpabilidad en el accionar de mi representada. En efecto, el domicilio indicado en la demanda no era erróneo como pretende hacer creer la actora, sino que incompleto, pues no precisaba cual era el departamento que servía de habitación al demandado. Era el Ministro de Fe el llamado a informar que el domicilio aportado correspondía a un edificio o bien, hechas las averiguaciones en el mismo, estampar las búsquedas donde correspondía y no en el departamento de un tercero distinto. Tal como se



«RIT»

Foja: 1

dijo al contestar la demanda, el señalamiento de determinado domicilio en una demanda no puede ser causa directa y necesaria de daño alguno. Ello por cuanto, antes de notificar, el Ministro de Fe tiene la obligación legal de informar si ese es efectivamente el lugar que le sirve de morada al demandado y, además, si se encuentra en el lugar del juicio. Por otro lado, ya se ha dicho que el embargo se trabó cuatro meses después de haber estampado las búsquedas y notificado el ministro de fe. Asumiendo que es efectivo lo que éste señala (presunción de veracidad que opera en su favor según el artículo 427 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil) en cuanto a que se habría entrevistado con una mujer adulta y que esta correspondía a una de las dos demandantes, no se entiende entonces por qué éstas esperaron a que se concurriera a trabar el embargo con el auxilio de la fuerza pública, para advertir al Tribunal del error en que se estaba incurriendo. No debe olvidar S.S. que la contraria, tal como expone en su demanda, incidenta de nulidad recién el 7 de mayo de este año, en circunstancias que ya habían tenido contacto con el receptor y habían recibido las copias de la demanda según relata el Ministro de Fe. Respecto del incidente hay que aclarar, además, que fue rechazado por cuanto se estimó que no siendo parte y no habiéndose materializado el embargo - en cuyo caso procedía intentar la respectiva tercería-, no existía perjuicio alguno que pudiera ser subsanado con la declaración de nulidad. La innecesaria e inexplicable demora de la contraria en concurrir al Tribunal o incluso al propio Banco para informar del error en que estaba incurriendo el Ministro de Fe, hubiesen bastado para evitar cualquier daño. - En cuanto al supuesto daño. Ya se ha dicho que la diligencia de embargo a partir de la cual la contraria reconoce la generación del supuesto daño, no se materializó, tal como consta del estampe de la receptora señora Rosa Olivares Cerda. Por lo tanto, no se vislumbra cuál sería el perjuicio causado. La actora afirma que habría quedado expuesta su condición de homosexual, cuestión que habría vulnerado su intimidad. Lo cierto es que sin perjuicio de que esta parte considera que la condición sexual de una persona no puede de modo alguno derivar en causa de indignidad de ninguna especie, de lo que se expone en la demanda aparece claramente que fue la propia señora Salas quien hizo presente a la Receptora su condición de homosexual. Si se sentía más cómoda ocultándolo, nada ni nadie la obligaba a reconocerlo. Tenemos en consecuencia que las peticiones de la contraria respecto de los supuestos perjuicios sufridos son completamente improcedentes, se refieren a perjuicios inexistentes, o no relacionados con los hechos de autos ni con esta parte, sin nexo causal y, en todo caso se encuentran completamente sobre valorizados.

POR TANTO, RUEGO A VS. tener por evacuado el trámite de la dúplica.”

NOVENO: Con fecha 25 de febrero de 2019, don Claudio Nicolas Alarcón, por el demandando Mauricio Ulloa Del Prado evacuó en trámite de la dúplica, al siguiente tenor:

“PRIMERO: Que, ratifico en todas sus partes las excepciones, alegaciones y defensas formuladas en el libelo de contestación de demanda de 8 de febrero de 2019, las cuales no han podido ser refutadas por las actoras, quienes sólo se han hecho cargo parcial y malamente de algunas de ellas, guardando un estricto silencio sobre las restantes. Frente a esta deliberada omisión, que sólo explicable por la veracidad y procedencia de los presupuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por esta defensa, reiteramos, como cuestiones sustanciales para la resolución de





Foja: 1

este litigio, lo siguiente: No se cumplen los presupuestos que exige la ley para la procedencia de la infundada demanda de responsabilidad extracontractual interpuesta contra mi representado, por la cual se exige el resarcimiento de millonarios perjuicios. Muy especialmente, no existe causalidad entre estos y la actividad del señor Ulloa. Es así porque los supuestos daños derivarían de la acción directa e inmediata de la señora receptora Rosa Olivares y Carabineros de Chile, a quienes extrañamente no demanda. Juzgue US. tal “olvido”. Don Mauricio Ulloa actuó siempre, en el desempeño de su ministerio, con estricto apego a la Ley, de forma rigurosa y de buena fe. Consultó a las personas que habitaban el inmueble por el demandado señor Richard Contreras Giha y se le dijo que ese era efectivamente su domicilio. Ante tal respuesta, al señor Ulloa sólo le correspondía cumplir con su deber que prescribe el art. 393 del Código de Procedimiento Civil, atestiguando lo que consta en el estampado de autos. Se reitera que un receptor judicial sólo puede dar testimonio fidedigno del lugar, día, mes y año donde se realizó y las formalidades con las que cumplió; más no de los dichos expresados por terceros que constan en sus atestados. El señor Ulloa no ha incurrido en ninguna “falsedad” en su obrar. La Real Academia Española de la Lengua define “falso” como “fingido o simulado” o “que miente o que no manifiesta lo que realmente piensa o siente”. Don Mauricio Ulloa jamás actuó de manera falsa o en contra de la ética, pues constató en su estampado la realidad que vio y percibió, por sus propios sentidos. Luego, mal podría existir falta al debido cuidado o culpa, al haberse ajustado estrictamente a la realidad sus actuaciones. En consecuencia, la insinuación del demandante sobre el particular es completamente impertinente y ofende gravemente su honra. Las demandantes siempre tuvieron en sus manos -desde el primer minuto de recibir la cédula correspondiente- la solución a los pesares que le enrostran al señor Ulloa. En efecto, pudieron interponer libremente las acciones jurisdiccionales que les provee el ordenamiento jurídico para no verse “afectadas” o “estresadas” por un hecho de “un vecino de ellas”. Si lo hicieron o no, o si tuvieron éxito en su cometido, es absolutamente ajeno, no empece y no podría ser culpa de mi representado. Repugna el sentido común que, en virtud del rechazo del Tribunal competente del incidente de nulidad de todo lo obrado que interpusieron, hagan responsable a mi representado por no haber encontrado “una solución rápida”. US. podrá poner atajo a tamaño intento de aprovecharse de su propia desidia para lucrar a costa del señor Mauricio Ulloa. SEGUNDO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimidad activa de las demandadas por los problemas que vivió el padre de una de ellas, ésta deberá ser necesariamente acogida. En efecto, las actoras en su réplica intentan variar los hechos fundantes de su demanda a su antojo y conveniencia, pues en la demanda -en todo momento- se refieren a los “perjuicios directos y morales” que sufrieron “sus representadas”; para después en su réplica referirse a perjuicios indirectos y al art. 108 del Código Procesal Penal que, sin perjuicio de ser evidentemente impertinente su aplicación en esta sede, intentan equipararse a la calidad de víctimas. TERCERO: Que, asimismo, reiteramos que los hechos que le causaron “tal grado de aflicción y estrés” a las actoras, consistentes en el embargo con fuerza pública, la descompensación del señor Fredy Salas (quien no demanda) y los dichos respecto de su orientación sexual, expuestos latamente en el libelo de autos, no fueron realizados por el señor receptor Mauricio Ulloa, por lo que mal podría se “de exclusiva responsabilidad del actuar del Sr. Ulloa”, como lo afirma mendazmente en su réplica. Todo lo que se diga de contrario sólo tiene por objeto



«RIT»

Foja: 1

no demandar a quienes -eventualmente- podrían ser -remotamente- los causantes de su “dolor” o “angustia”. La receptora Rosa Olivares y Carabineros de Chile.

POR TANTO; En mérito de lo expuesto, disposiciones legales precitadas y demás que resulte pertinente aplicar, Sírvasse S.S., tener por evacuado el trámite de la dúplica por mi representado MAURICIO ULLOA DEL PRADO y, en definitiva, rechazar la acción deducida en su contra, con expresa y ejemplar condena en costas.”.

DÉCIMO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción la parte demandante rindió la siguiente prueba:

DOCUMENTAL. Acompañados con fecha 14 de octubre de 2019: 1.- Certificado de dominio vigente atingente al departamento N°605, 6° piso del edificio Golden Plaza, inscrito a fojas 9098 F, N°7092 correspondiente al año 2000 del Registro de Propiedad del Primer Conservador de Bienes Raíces. 2.- Contrato de arrendamiento respecto a la propiedad antes individualizada, de fecha 17 de julio del año 2017, ante el notario público Juan Antonio Loyola Opazo. 3.- Carta poder notarial de fecha 14 de julio del año 2017, por la que doña María Cecilia Urrutia Sánchez otorga en efecto poder amplio a doña Cecilia Salas Urrutia, facultándola para arrendar la propiedad individualizada en el punto “1.”. 4.- Comprobante de pago de dividendo hipotecario respecto de la propiedad individualizada en el punto “1.”, en la que figura como obligada doña María Cecilia Urrutia Sánchez. 5. Boleta para el pago del servicio eléctrico respecto de la propiedad individualizada en el punto “1.”, en la que figura como cliente doña María Cecilia Urrutia Sánchez. 6. Constancia ante Carabineros de la 2° Comisaría de Temuco, que da cuenta de los hechos ocurrido el día 18 de abril del año 2018. 7. Carta certificada de notificación a cargo de la receptora doña Rosa Olivares Cerda, de fecha 25 de abril del año 2018, dejada en el domicilio individualizado en el punto “1.”, dirigida a don Richard Williams Contreras Giha. 8. Contrato de arrendamiento de fecha 01 de mayo del año 2018, suscrito por doña Cecilia Salas Urrutia, en calidad de arrendataria, respecto de la propiedad ubicada en Luis Durand N°0155, Dpto N°308, Torre E, comuna de Temuco. 9. E-book relativo a causa ROL C-5584-17, seguido ante el 1° Juzgado Civil de Temuco. 10. Certificado médico de fecha 21 de agosto del año 2015, emitido por la doctora María Soledad Barroso. B, medicina interna y diabetes, relativo al paciente, don Freddy Salas Correa. 11. Certificado de nacimiento de doña Cecilia Salas Urrutia.

TESTIMONIAL Con fecha 11 de octubre de 2019 se realizó la audiencia, declarando 1.- ROSARIO DEL CARMEN ESPINOZA FUENTES, Rut: 6.082.209-3, ya individualizada en autos, quien previamente juramentada e interrogada al tenor de los puntos de prueba de fecha 31 de mayo y 16 de septiembre del 2019 expone: “Al punto uno: Yo estaba presente cuando fue doña Rosa con carabineros al departamento del señor Richard Contreras, El conserje le dijo que le iba a avisar a don Richard su visita, la señora Rosa se opuso dijo que iba al departamento, quien venía acompañada de carabineros. Ella subió e ingreso al departamento de doña Cecilia, se equivocó. La señora Cecilia llamó a conserjería que estaba equivocado de departamento. Luego llegó el papá de doña Cecilia y estas personas creían que era don Richard Contreras, se lo querían llevar detenida. Y yo les dije que era el papá de Cecilia. Repreguntada para que diga, en qué departamento vive don Richard Contreras. Responde en el 602. Ello me consta



«RIT»

Foja: 1

porque estoy ben el edificio, nos hicimos cargo hace un año y siete meses con otras cinco personas. Don Richard vive hace más de dos años en el departamento señalado. Para que diga de acuerdo al documento que en este acto se le exhibe, y que consta en auto y que corresponde a estampe receptorial de fecha 12 de diciembre del año 2017, señale si es efectivo lo que en ese estampe se certifica. Responde, no efectivo, ya que este departamento es el de la señorita Cecilia. Para que diga de acuerdo al documento que en este acto se le exhibe, y que consta en auto y que corresponde a un crédito de consumo suscrito por don Richard Contreras y para que señale si el domicilio expresado corresponde al señor Contreras. Responde, él vive en esa dirección pero no está especificado el número del departamento. Para que diga, si es que doña Cecilia Salas tiene relación con don Richard Contreras. Responde no, nunca los he visto que tengan una relación y tuvieron un altercado en la conserjería por lo que pasó. Para que diga, si conoce o sabe sobre la vida amoroso de doña Cecilia Salas, Responde, si. Yo como estoy en el edificio constantemente sé que tiene una pareja que se llama Claudia. Al punto dos: Por supuesto, con todo lo que pasó me imagino que debe haber daño. Para que diga, si es que doña Cecilia sigue viviendo en el edificio. Responde no se cambió, el departamento está desocupado, se arrienda. Ella se fue por todo lo que pasó. Al punto tres: Si, Por lo que pasó, yo creo. Para que diga, si tuvo conocimiento de las búsquedas realizadas por el receptor Mauricio Ulloa a don Richard Contreras. Responde, si llegaron cartas anteriormente buscando a don Richard Contreras. Al punto cuatro: No la presenta. Al punto cinco: Conozco a Claudia ya que ella vive con Cecilia, si ella podría demandar, además estaba presente en el departamento ese día.”.-

ABSOLUCION DE POSICIONES: Con fecha 22 de noviembre de 2019, se lleva a cabo la diligencia de absolución de posiciones del demandado don Mauricio Ulloa Del Prado, cédula de identidad N° 8.784.164-2, con la asistencia del apoderado de la parte demandante don Tomas Sepúlveda Muñoz y el apoderado de la parte demandada don José Luis Neira Vejar, el absolvente legalmente juramentado e interrogado al tenor del pliego de posiciones expuso: “1.- Por el solo N de rol, no lo recuerdo. 2.- No podría asegurarlo si no se me señala la causa o el demandado, porque recuerdo los casos por el demandado. 3.- Como señale en el punto anterior no podría asegurar lo señalado, ya que solo se identifica la causa por el N de rol sin a lo menos señalar quien sería el demandado. 4.- Reitero nuevamente lo señalado por cuanto no se de la causa que se me está preguntando. 5.- No es efectivo. 6.- Como señale no es posible contestar la pregunta por cuanto no se me señala la que causa se refiere. 7.- Lo desconozco por cuanto no sé a qué causa me estarían preguntando. 8.- Lo desconozco. 9.- No es efectivo, ya que como señale anteriormente no sé en qué causa se me están haciendo las preguntas.”

DECIMO PRIMERO: Que, a fin de acreditar sus alegaciones, excepciones y /o defensas la parte demandada Banco Scotiabank Chile S.A. rindió la siguiente prueba:

DOCUMENTAL. Acompañados con fecha 09 de octubre de 2019: 1.- Crédito de Consumo suscrito por don Richard Williams Contreras Giha, en que el deudor señala como su domicilio el ubicado en “Aldunate 710 Temuco”. 2.- Estampados de 12 y 13 de diciembre en que el señor Ministro de Fe demandado en estos autos, don Mauricio Ulloa del Prado, certifica en la causa Rol N° 5584-2017 del 1° Juzgado Civil de Temuco, que don Richard Williams Contreras Giha tiene su



«RIT»

Foja: 1

domicilio en Aldunate 710, departamento 605, Temuco, conforme le habría sido informado por una persona adulta de sexo femenino. 3.- Resolución de 19 de diciembre de 2017, folio 9, dictada en causa Rol N° 5584-2017 del 1° Juzgado Civil de Temuco, en que el Tribunal autoriza a notificar la demanda conforme al artículo 44 del CPC. 4.- Estampado del señor Receptor don Mauricio Ulloa del Prado, en que con fecha 21 de diciembre de 2017 manifiesta haber notificado según el art. 44 del CPC, al deudor señor Contreras Giha, entregando las copias a persona adulta de sexo masculino, en el domicilio ubicado en Aldunate 710, departamento 605, Temuco. 5.- Estampado de 18 de abril de 2018, en que la señor Receptora Judicial doña Rosa Olivares Cerda manifiesta no haber podido trabar el embargo en el domicilio ubicado en Aldunate 710, departamento 605, Temuco, por no corresponder al del deudor señor Contreras Giha, según lo informado por doña Cecilia Andrea Salas Urrutia.

DECIMO SEGUNDO: Que, el demandado don Mauricio Ulloa Del Prado, no rindió prueba alguna en autos.

DECIMO TERCERO: Que, del mérito de lo expuesto por las partes en la etapa de discusión, sea por haberse reconocido expresamente en la contestación de la demanda sea por no haberse controvertido y encontrándose además refrendados con los medios de prueba que se indicarán en cada caso, apreciados conforme a lo dispuesto por la ley en sus diversos casos, se pueden tener por establecidos los siguientes hechos de la causa:

1.- Que en los autos rol C-5584-2017, caratulados “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile S.A. con Contreras”, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, se inició con fecha 01 de diciembre de 2017 acción ejecutiva de cobro de pagaré en contra de don Richard Williams Contreras Giha, señalándose en la demanda ejecutiva como domicilio del ejecutado el de calle Aldunate N° 710 de la comuna de Temuco.

2.- Que con fecha 12 y 13 de diciembre de 2017 constan en los autos indicados estampe de búsquedas del receptor Mauricio Ulloa Del Prado en el domicilio de calle 710 depto 605 de la ciudad de Temuco, consignándose que don Richard Williams Contreras Giha no ha sido habido(a) personalmente, haciendo presente en la certificación que es ese su domicilio y que éste(a) se encuentra en el lugar del juicio, según lo informado por una persona adulta de sexo femenino del mismo domicilio.

3.- Que conforme a los estampes antes transcritos con fecha 19 de diciembre de 2017 el Tribunal de la causa rol C-5584-2017, autorizó a notificar la demanda ejecutiva y su resolución en los términos del artículos 44 del Código de Procedimiento Civil, verificándose dicha notificación con fecha 21 de diciembre de 2017, según consta en estampe receptorial del señor Mauricio Ulloa Del Prado. Se deja testimonio además que las copias íntegras de todo las dejó en poder de una persona adulta del sexo masculino de su mismo domicilio quien no dio su nombre y se excusó de firmar por estimarlo innecesario.

4.- Que consta además estampe receptorial de fecha 22 de diciembre de 2017 por el cual el receptor Mauricio Ulloa intentó trabar embargo en el domicilio de calle Aldunate N° 710 departamento 605 de Temuco, diligencia que le fue imposible



«RIT»

Foja: 1

llevar a efecto, debido a que persona adulta del sexo masculino de su mismo domicilio se opuso a la traba de embargo.

5.- Que con fecha 18 de abril de 2018, la receptora Rosa Olivares Cerda certifica que se constituyó en el domicilio de calle Aldunate N° 710 departamento 605 de Temuco con auxilio de la fuerza pública compuesta por el funcionario de Carabineros cabo 1° don Alberto Fuentes Carrillo a fin de trabar embargo, diligencia que no pudo cumplir por oponerse persona adulta de sexo femenino que se identificó como Cecilia Andrea Salas Urrutia, quien le manifestó que el demandado nunca ha sido notificado en esa dirección y que ella siempre ha vivido en ese domicilio.

Ninguno de estos hechos fue controvertido por las partes y queda respaldado con las piezas del expediente de la causa indicada, acompañada por la parte demandante con fecha 14 de octubre de 2019, por medio del E-book no objetado por la contraria.

DECIMO CUARTO: Que don Francisco Pineda Peña en representación de doña Cecilia Andrea Salas Urrutia y doña Claudia Elizabeth Besnier Calderón, deduce demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual por daño moral en contra de don Mauricio Alejandro Ulloa Del Prado y Banco Scotiabank Chile S.A. (Conforme a la rectificación de demanda de fecha 06 de octubre de 2018), solicitando se les condene a pagar la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), más los reajustes y costas de la causas.

Que, con relación al señor Ulloa Del Prado, funda su acción en que en su calidad de receptor judicial, certificó con fechas 12 y 13 de diciembre de 2017 de manera errada en los autos Rol C-5584-2017, del Primer Juzgado Civil de Temuco, como domicilio del ejecutado don Richard Williams Contreras Giha, para efectos de notificar la demanda ejecutiva el de calle Aldunate N°710 departamento 605 de Temuco. Luego notificó también erradamente en el mismo domicilio la demanda y su provisto conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento. Y, finalmente con fecha 22 de diciembre de 2017 certifica que intentó trabar embargo en el mismo domicilio, diligencia que le fue imposible llevar a efecto, debido a que persona adulta del sexo masculino de se opuso a la traba de embargo. Lo anterior, a su vez derivó en un posterior intento de embargo con auxilio de la fuerza pública por la receptora Rosa Olivares Cerda, siendo dicha gestión la que motiva la demanda por los perjuicios morales que indica. Añade que acción u omisión culpable que le imputa se traduce en la falta de cuidado en el despliegue de la gestión encomendada dejando testimonio en sus estampes de un hecho falso o que no se ajusta a la realidad por cuanto el domicilio de calle Aldunate N° 710 departamento 605 de Temuco no correspondía al demandado sino que a un tercero distinto, puntualmente a la madre de doña Cecilia Salas, demandante de autos, quien en ese entonces vivía en el lugar.

Que en lo que respecta a la demandada Banco Scotiabank Chile S.A., funda su acción en que esta entidad obró de manera descuidada por cuanto aporta un domicilio en su demanda sin cerciorarse de que pertenecía a la persona a la que se ejecutaba y haber mantenido el estado de las cosas con conocimiento de ser errado el domicilio hasta el punto de intentarse trabar embargo. Deja



«RIT»

Foja: 1

asentado primero en su demanda que la responsabilidad sería subsidiaria para luego en su escrito de réplica señalar que sería solidaria.

DECIMO QUINTO: Que, conforme a lo expuesto resulta claro que la acción indemnizatoria intentada tiene su basamento en la presunta responsabilidad extracontractual de la parte demandada, desde que se les atribuye un obrar poco diligente que habrían originado los perjuicios cuya indemnización se pretende. Que, los elementos de la responsabilidad civil extracontractual son los siguientes: 1.- Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito; 2.- Que se haya causado un daño en la persona o patrimonio de la víctima, sea moral o material; 3.- Que dicho daño sea un efecto directo de la acción u omisión del autor, estos es que haya obrado con dolo o culpa; 4.- Que exista una relación causal entre la actividad del autor y el daño a la víctima. Tales requisitos deben concurrir en forma copulativa.

DECIMO SEXTO: Que, se debe dejar asentado que habiéndose acogido la excepción de falta de legitimación pasiva respecto del Banco Scotiabank Chile el análisis de los presupuesto de la acción incoada se analizan solo respecto de los presuntos daños ocasionados a las demandantes por las actuaciones del demandado Mauricio Ulloa Del Prado.

DECIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al primer requisito la regla general es la capacidad del autor para cometer delitos o cuasidelitos siendo la incapacidad una excepción conforme a lo dispuesto en el artículo 2319 del Código Civil; en este sentido no se ha alegado su incapacidad, por lo que se estimará que concurre el primer requisito a su respecto.

DECIMO OCTAVO: Que, el segundo presupuesto antes enunciado, a saber, que se haya causado un daño en la persona o patrimonio de la víctima sea moral o material, la demandante lo hace consistir en el caso de marras en daño moral, solicitando se condene a las demandadas a pagar la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos). Señala que el intento de embargo con auxilio de la fuerza pública realizado con fecha 18 de abril de 2018 por la receptora Rosa Olivares Cerda les generó un estrés y desasosiego que perdura hasta el día de hoy, dado que habrían vivido un día “del terror” por cuanto mientras almorzaban la receptora en cuestión se apersona en el domicilio junto a un cabo de Carabineros con el objeto de practicar el embargo, a lo cual doña Cecilia Salas se opuso no obstante lo cual habrían ingresado por la fuerza, viéndose expuesta a dar explicaciones de que el ejecutado no vivía en ese domicilio, que dicha propiedad era de su madre y que nada tenía que ver con el señor Contreras, teniendo incluso que relevar su condición de homosexualidad para que les creyeran el por qué vivirían dos mujeres en el inmueble, sintiéndose vulneradas en su espacio más íntimo. Añaden que también llegó al domicilio el padre de doña Cecilia, quien en el hall del edificio fue obligado a identificarse por el funcionario policial bajo amenaza de llevarlo detenido lo que lo habría descompensado ya que es diabético. Todo este hecho las hizo perder una tarde de trabajo y por último añaden que la impotencia y rabia por lo ocurrido las llevan a intentar distintas vías de solución sin obtener a la fecha resultados favorables.

Que, el daño es conceptualizado como todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona o sus bienes, libertad, honor, crédito, creencias, afectos, entre otros. A su vez, el daño moral



«RIT»

Foja: 1

tradicionalmente es definido como “el sufrimiento, trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo”.

Que sobre este particular es preciso remarcar insistentemente que todo daño debe probarse, sea patrimonial, sea extrapatrimonial. El método y el objeto sobre que recae la prueba, y su extensión, serán diferentes según la clase de daño; pero esa es una cuestión aparte y no hace excusable la prueba que se ha de rendir en todo caso. La razón de lo expresado es simple: no existen en nuestro derecho normas especiales sobre la prueba del daño moral y, en consecuencia, rigen sin contrapeso las reglas generales. Es por ello que, en primer lugar, para que el daño moral sea indemnizable, se requiere, como ocurre con todo daño, que sea cierto o real y no meramente hipotético o eventual; y en segundo lugar, tiene también plena aplicación, a su respecto, el principio fundamental del “onus probandi”, que conforme al artículo 1698 del Código Civil impone al actor el deber de probar la verdad de sus proposiciones. Así el demandante estaba obligado a probar el agravio, la certeza y realidad del mismo, su entidad y magnitud y las consecuencias que de él se han derivado.

Que precisado lo anterior, la actora rindió en autos prueba documental, testimonial y absolución de posiciones del demandado don Mauricio Ulloa Del Prado, ninguna de las cuales permiten tener por acreditada la existencia del daño moral demandado.

Que en efecto, se acompaña con fecha 14 de octubre de 2019 prueba documental tendiente a acreditar que la propiedad en que se notificó la demanda ejecutiva y luego se intentó trabar embargo correspondía a la madre de doña Cecilia Salas, una constancia de Carabineros de 19 de abril de 2018 que da cuenta los hechos acaecidos el día 18 de abril de 2018, el E-book de la causa ejecutiva rol C-5584-2017 del 1° Juzgado Civil de Temuco y un certificado médico de don Freddy Salas padre de una de las demandantes; documentos que resultan inconducentes para acreditar la existencia de un daño moral de las demandantes y únicamente permiten tener por establecido un hecho que como se consignó en un considerando previo no resultó controvertido, esto es, que el día 18 de abril de 2018 la receptora Rosa Olivares se apersonó en el domicilio de calle Aldunate 710, departamento 605 de la comuna de Temuco a fin de trabar embargo. A su vez, el certificado médico acompañado, solo permite establecer que el padre de doña Cecilia Salas es diabético, pero no prueba el daño de las demandantes, sino solo da cuenta de una enfermedad de quien ni siquiera actuó como demandante en autos.

Que a su vez en relación a la prueba testimonial, declaró doña Rosario Espinoza Fuentes de cuyos dichos no se puede tener por establecido el daño moral demandado, dado que por un lado se limita a realizar una escueta relación de lo ocurrido el día 18 de abril sin precisar si estuvo presente en el departamento de las demandantes y porque además en ningún momento habla de los perjuicios morales que reclaman las actoras. Es más, al ser preguntada al punto dos por la efectividad de haber sufrido perjuicios las demandantes a causa del hecho ilícito imputable a las demandadas, señala que: “Por supuesto, con todo lo que pasó me imagino que debe haber daño”, quedando en evidencia que ella no tiene



«RIT»

Foja: 1

conocimiento de los daños que se podrían haber ocasionado a las demandantes, siendo en tal punto su declaración meramente especulativa. Máxime, si tenemos presente que la testigo en cuestión solo estuvo presente en el edificio el día de los hechos y ella misma reconoce que doña Cecilia Salas se habría cambiado de domicilio y no declara haber tenido contacto con las demandantes con posterioridad que permita aseverar que después de ocurrido el hecho el estado emocional en el que se encuentran, que es lo que han alegado las actoras en su libelo.

Que adicionalmente a lo ya manifestado, el día de los 18 de abril de 2018 se encontraba presente en el domicilio doña Cecilia Salas, como consta en el estampe receptorial de doña Rosa Olivares Cerda que figura agregado en la causa rol C-5584-2017 del Primer Juzgado Civil de Temuco, no habiéndose rendido prueba suficiente que permita determinar que la segunda de las demandantes doña Claudia Besnier se encontrase en el domicilio viéndose expuesta a los desagradables y desafortunados sucesos que relatan. De la propia constancia realizada en la Segunda Comisaría de Temuco acompañada por el demandante, se da cuenta que solo concurre doña Cecilia Salas siendo posible vislumbrar que solo ella estuvo presente, ya que al relatar lo acontecido en ningún momento refiere que junto con ella se encontraba doña Claudia, lo cual resulta a lo menos curioso dada la magnitud de los acontecimientos que sostienen haber sido víctimas, por este motivo también malamente podría haber prosperado la demanda respecto de la demandante Claudia Besnier Calderón.

Que, finalmente la absolución de posiciones de don Mauricio Ulloa Del Prado de fecha 22 de noviembre de 2019, al ser repreguntado sobre la efectividad de haber sufrido las demandantes perjuicios morales y materiales a causa de sus certificaciones, responde que “no es efectivo ya que como señalé anteriormente no sé en qué causa se me están haciendo las preguntas.” Resultando dicha prueba del todo inconducente a efectos de acreditar el daño moral sobre todo si el receptor en cuestión no estuvo presente el día de los hechos ni tampoco consta que mantenga una relación con las demandantes que lo habilite para declarar sobre eventuales perjuicios de las mismas.

Que como colorario de lo anterior y no habiéndose acreditado el segundo presupuesto de acción incoada por ser la prueba impertinente e insuficiente, no permitiendo a este sentenciador siquiera tener por establecida una presunción en relación al daño demandado, por cuanto estas deben estar basadas en hechos reales y probados y no en meras suposiciones, es decir, no según deducción en el vacío y discurriendo solo en abstracto, al margen de una realidad procesal, es que deberá rechazarse la demanda según se dirá en lo resolutive.

DECIMO NOVENO: Que a mayor abundamiento resulta preciso dejar asentado que las demandantes han deducido su acción en contra del receptor Mauricio Ulloa Del Prado y del Banco Scotiabank Chile S.A., imputándoles a ellos los daños que se les provocaron en el intento de embargo efectuado por la receptora Rosa Olivares Cerda, queda en evidencia a primera vista que la acción impetrada en ningún caso podría haber prosperado, por cuanto ejercen su acción de indemnización de daño moral por la angustia y estrés vividos el día 18 de abril de 2018, por las actuaciones realizadas por la receptora y un cabo de Carabineros que no han sido emplazado en autos . Como quiera, aun cuando sostengan que





«RIT»

Foja: 1

los presuntos daños provocados en el intento de embargo derivan de certificaciones realizadas por el receptor Mauricio Ulloa Del Prado las que serían falsas o no ajustadas a la realidad, no se ha probado ni el expediente de la causa Rol C-5584-2017 del Primer Juzgado Civil de Temuco ni en otro juicio que tales atestado fueron falsos.

VIGÉSIMO: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, este Tribunal no se hará cargo del análisis de los restantes requisitos de la acción impetrada enunciados en el considerando vigésimo, los que al ser copulativos lo hace del todo inoficioso e inconducente así como también resulta innecesario pronunciarse sobre las restantes alegaciones de los demandados.

VIGESIMO PRIMERO: Que, la prueba no analizada en particular en nada altera lo dispositivo del presente fallo.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1702 y 2314 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 254, 318, 342, 346, 358, 373 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- HA LUGAR, a la tacha del artículo 358 número 1 del Código de Procedimiento Civil, deducida por la parte demandante en contra del testigo don FREDDY AGUSTÍN SALAS CORREA, a folio 71, sin costas.-

II.- NO HA LUGAR a la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual interpuesta a folio 1 por don FRANCISCO PINEDA PEÑA, en representación de doña CECILIA ANDREA SALAS URRUTIA y de doña CLAUDIA ELIZABETH BESNIER CALDERÓN, en contra de MAURICIO ALEJANDRO ULLOA DEL PRADO y del BANCO SCOTIABANK CHILE S.A, RUT 97.018.000-1, sociedad anónima bancaria y financiera, representada por su gerente actual, don FRANCISCO SARDÓN DE TABOADA .-

III.- Que no se condena en costas a las demandantes por estimar que tuvieron motivos plausibles para litigar.-

Anótese, Regístrese y Notifíquese.-

Rol: C-3385-2018.-

Dictada por doña Mónica Toledo Reyne, Juez Subrogante del Segundo Juzgado Civil de Temuco.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Temuco, diez de Marzo de dos mil veinte

